

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/CTE/M/11

22 de agosto de 1996

(96-3320)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 1996

Nota de la Secretaría

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente se reunió los días 24 y 25 de julio de 1996 bajo la presidencia del Embajador Juan Carlos Sánchez Arnau de la Argentina. Se aprobó el orden del día de la reunión reproducido en el aerograma WTO/AIR/380.

Segundo punto: La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos y las disposiciones del sistema multilateral de comercio

2. El representante de los Estados Unidos presentó el documento de su delegación (WT/CTE/W/37) sobre el examen de los efectos ambientales de los acuerdos comerciales como instrumentos de política de los gobiernos que aportan información de base sobre cómo se han utilizado los exámenes ambientales y el tipo de análisis que facilita a los encargados de tomar decisiones, por ejemplo, en el contexto de los acuerdos comerciales. Los exámenes ambientales pueden ayudar a determinar las complementariedades entre las políticas ambientales y comerciales y a identificar las medidas capaces de mejorar las repercusiones ambientales positivas y de evitar las negativas en el apoyo al desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta las recomendaciones de órganos internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), en las que se estimula a los gobiernos a que realicen exámenes ambientales de los acuerdos comerciales, los Estados Unidos proponían que los Ministros de la OMC recomendaran a los gobiernos que realizaran exámenes ambientales de los acuerdos comerciales que es probable produzcan efectos importantes sobre el medio ambiente como parte del proceso de elaboración de esos acuerdos. Los Ministros podrían recomendar, además, que se invite a los Miembros de la OMC a facilitar a la Secretaría, para información de los Miembros, ejemplares de dichos estudios y documentos relativos a la metodología empleada en su realización.

3. El representante de la India dijo que su delegación había aportado un documento no oficial sobre este punto (de fecha 23 de julio de 1996) para iniciar el debate de los principios generales que se deberían aplicar para evaluar la adecuación de las políticas y medidas ambientales que producen efectos comerciales desde el punto de vista de los principios de la OMC. Los principios comerciales pertinentes eran la no discriminación (N.M.F., trato nacional), la protección por medio de los aranceles, la transparencia, el artículo XX (necesidad y eficacia, restricciones mínimas del comercio, proporcionalidad y equivalencia, y trato especial y diferenciado de los países en desarrollo). Los principios ambientales pertinentes eran las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la soberanía sobre los recursos ambientales, la distribución justa y equitativa de los beneficios y las necesidades especiales de los países en desarrollo. La opinión de la India era que esos principios, algunos de los cuales se detallaban en la lista no exhaustiva contenida en el documento no oficial, debían figurar en el informe del Comité de Comercio y Medio Ambiente a los Ministros ("el Informe") para orientar la labor futura del Comité. La India se había concentrado en los principios relacionados con las preocupaciones de los países en desarrollo, que ya habían sido aceptados en foros comerciales y ambientales multilaterales. Al debatir sobre estos principios, el Comité estaría mejor situado para analizar cómo se han de utilizar las disposiciones vigentes de la OMC de manera flexible para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo presentes los intereses de los países en desarrollo.

4. La representante de Singapur, en nombre de la ASEAN, convino con la India en que el Informe debería contener principios generales para evaluar la adecuación de las políticas ambientales teniendo en cuenta sus posibles efectos comerciales. El elemento esencial del Programa 21 era el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que los países tenían un derecho soberano a formular y aplicar sus políticas y medidas ambientales en la forma adecuada para proteger su medio ambiente nacional.
5. El representantes de Nueva Zelandia afirmó que su delegación conocía los méritos de los exámenes ambientales. Sin embargo, pidió a los Estados Unidos que aclararan la recomendación ministerial propuesta de que los gobiernos realizaran esos exámenes y el motivo por el que la OMC debería aprobar los exámenes ambientales cuando órganos internacionales con competencia ambiental ya lo hubieran hecho. Dada la limitada competencia de la OMC en la esfera del medio ambiente, Nueva Zelandia se preguntaba si la OMC debería recomendar el empleo de un instrumento que giraba en torno a consideraciones ambientales.
6. El representante de Corea hizo suyas las observaciones de Nueva Zelandia sobre la propuesta de los Estados Unidos.
7. El representante del Canadá acogió con satisfacción la propuesta de los Estados Unidos como una manera de ayudar a los países a lograr que las políticas comerciales y ambientales se respaldaran mutuamente. El Canadá había realizado evaluaciones sobre los efectos ambientales del TLC y de la OMC.
8. El representante de Nigeria apoyó la propuesta de la India en principio. Convino con Nueva Zelandia y Corea en que la cuestión planteada por la propuesta de los Estados Unidos estribaba en saber si la OMC era el foro apropiado para realizar exámenes ambientales de los acuerdos comerciales.
9. El representantes de las Comunidades Europeas dijo que la lista de la India de principios ambientales generales debería incluir otros principios de Río, como la cooperación, el principio de quien contamina paga y el principio de precaución.
10. La representante de Egipto convino en que los principios generales de la India se deberían tener en cuenta en el Informe y en la labor futura del Comité de Comercio y Medio Ambiente. Respaldó las observaciones de Nueva Zelandia.
11. El representante de México dijo que su delegación consideraba que los exámenes ambientales eran útiles y los había realizado. Sin embargo, como no entendía la competencia de la OMC en asuntos ambientales, México no podía apoyar la sugerencia de que sometieran exámenes ambientales a la OMC. Esos exámenes debían someterse a las organizaciones con competencia en la esfera del medio ambiente. Por el mismo motivo, dudaba de que fuera oportuno examinar los principios ambientales de la India, pero consideraba que los principios comerciales deberían reflejarse en el Informe y ser tenidos en cuenta cuando se debatieran otros puntos.
12. El representante del Perú pidió a los Estados Unidos que aclararan si la propuesta correspondía al mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente. El Perú apoyaba la propuesta de la India de incluir algunos principios generales en el Informe, que podía también incluir otros principios relacionados con el comercio.
13. El representante de Bangladesh hizo suya la propuesta de la India, teniendo presente la situación especial de los países menos adelantados.
14. El representante del Pakistán apoyó ampliamente los principios que figuraban en el documento no oficial de la India y dijo que formularía otras observaciones más adelante sobre las propuestas de los Estados Unidos y de la India.

15. El representante del Japón dijo que formularía sus observaciones sobre las propuestas en una etapa ulterior.

16. El representante de Hong Kong dijo que la propuesta de la India de elaborar unos principios generales podía complementarse con la propuesta de su delegación sobre el primer punto (documento no oficial de fecha 23 de julio de 1996) relativo a una orientación con respecto a los principios de la OMC para información de los negociadores de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA).

17. El representante de los Estados Unidos respondió a las observaciones sobre el documento de su delegación. En lo que respecta al ajuste de la propuesta al mandato y a la competencia de la OMC, los Estados Unidos no estaban sugiriendo que la OMC prescribiera cómo se deben realizar los exámenes ambientales, sino que los Ministros podían considerar que los exámenes eran un instrumento útil. Los exámenes ambientales eran pertinentes para la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente. Los exámenes podían contribuir al debate habida cuenta del mandato del Comité, que le encomendaba determinar la relación entre las medidas comerciales y las ambientales para promover el desarrollo sostenible, y las cuestiones planteadas con relación al segundo punto. También eran útiles para la labor relacionada con el sexto punto con miras a hallar la manera de maximizar la relación positiva entre comercio y medio ambiente. La premisa del documento de los Estados Unidos guardaba relación con la importancia de la coordinación nacional. En la medida en que los exámenes ambientales aportaban información sobre la relación entre comercio y medio ambiente, los Estados Unidos sugerían que esos exámenes se pusieran a disposición de los Miembros interesados. Recordó que los Estados Unidos habían facilitado sus exámenes a la Secretaría para facilitar la labor analítica que había realizado por cuenta del Comité de Comercio y Medio Ambiente.

18. Los Estados Unidos consideraban que el documento no oficial de la India era demasiado amplio en el sentido de que sugería que la función del Comité de Comercio y Medio Ambiente debería consistir en evaluar la adecuación de las políticas y medidas ambientales que producen efectos comerciales. Dijo que en el establecimiento de la labor del GATT/OMC sobre comercio y medio ambiente, la India había opinado que era inadecuada. Aunque la idea de determinar los principios comerciales pertinentes era interesante, preguntó dónde conduciría. Si la idea era análoga a la propuesta de Hong Kong, dijo que los intentos de reducir un conjunto complicado de normas podrían crear confusión. Algunos de los principios comerciales, como la eficacia, no se encontraban en la jurisprudencia sobre el artículo XX. Se hacía una referencia a la eficacia en el Informe del Órgano de Apelación sobre la Gasolina Reformulada, en el que se consideraba que este término no representaba una propuesta sensata ya que la eficacia de una medida no se podía evaluar de antemano. Algunos de los principios estaban relacionados con su contexto concreto y su generalización resultaba problemática. Dado que la OMC era un sistema basado en normas, los principios generales no ayudaban a los Miembros a respetarlas. Los principios ambientales eran útiles en la medida en que la lista fuera exhaustiva y abordara la flexibilidad de las normas de la OMC para tenerlas en cuenta.

Tercer punto: La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y a) las cargas e impuestos aplicados con fines ambientales; y b) las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

19. El representante de la India dijo que su delegación había presentado un documento no oficial (de fecha 23 de julio de 1996) para señalar que este punto globalmente considerado abarcaba cuestiones que tenía una repercusión directa en el comercio, especialmente para los países en desarrollo. La India proponía que el debate sobre este punto se ampliara para examinar todos sus aspectos de una manera objetiva e integrada. El documento no oficial de la India tenía por finalidad sugerir que el debate sobre el etiquetado ecológico no había aclarado algunas de las cuestiones que preocupaban a la India. El objetivo primordial del examen de medidas ambientales como el etiquetado ecológico debería ser averiguar si promueven u obstaculizan la adhesión de la OMC a un sistema comercial abierto, equitativo y no discriminatorio. El debate debería incluir la preocupación de los países en desarrollo acerca de la

repercusión de las medidas ambientales sobre el acceso al mercado. Sería prematuro llegar a cualquier conclusión sobre este punto sin tener en cuenta las preocupaciones manifestadas en el documento no oficial de la India.

20. La representante de Singapur, en nombre de la ASEAN, compartía las preocupaciones expresadas en el documento no oficial de la India. El Informe no debería contener ninguna conclusión sobre el tercer punto. Como no existía ninguna metodología internacionalmente convenida sobre los enfoques basados en el ciclo de vida, era necesario que se hicieran aclaraciones sobre esta cuestión.

Punto tercero a): La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las cargas e impuestos aplicados con fines ambientales

21. El representante de Australia dijo que, aun cuando no se habían formulado propuestas al respecto, este punto era importante y debía incluirse en la labor futura.

Punto tercero b): La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

Envase y reciclado

22. El representante de México dijo que este punto se debería incluir en la labor futura del Comité de Comercio y Medio Ambiente.

23. El representante del Canadá dijo que este punto tenía que ser abordado de nuevo porque la labor realizada hasta la fecha se había concentrado en el etiquetado ecológico. Sin embargo, el método adoptado con respecto al etiquetado ecológico podía aportar ciertas indicaciones sobre cómo analizar otras cuestiones después de Singapur.

Etiquetado ecológico

24. El representante del Canadá presentó el proyecto de Decisión de su delegación sobre el etiquetado ecológico (de fecha 23 de julio de 1996), que se basaba en el documento del Canadá (WT/CTE/W/21-G/TBT/W/21), en consultas posteriores (plurilaterales, bilaterales y con la comunidad empresarial del Canadá) y en la declaración formulada por el Canadá en la reunión de junio de 1995. Los párrafos 1 a 3 eran los apartados a) a c) del documento inicial del Canadá que respaldaban numerosas delegaciones. El párrafo 4 era el enfoque sugerido por el Canadá con respecto al apartado d) en la inteligencia de que el establecimiento de enfoques basados en el ciclo de vida tenía relación directa con el debate en el Comité de Comercio y Medio Ambiente y en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (COTC). El párrafo 5 era un párrafo "sin perjuicio", en el que se reconocía la diversidad de opiniones acerca de los procesos y métodos de producción (PMP) no relacionados con los productos. El Canadá pensaba que el proyecto de Decisión representaba un resultado realista y equilibrado en Singapur y pidió a las delegaciones que lo examinaran en el contexto de un análisis global del Informe y del estado de las deliberaciones sobre otros puntos. Dijo que el documento no oficial de las CE (de fecha 23 de julio de 1996) perseguía objetivos distintos de los de Singapur (es decir, el Canadá apuntaba a una "transparencia con fuerza de aplicación"), pero estaba de acuerdo con la necesidad de aumentar la transparencia de los programas de etiquetado ecológico basados en el acuerdo OTC. El proyecto de Decisión reconocía que era necesario proseguir el análisis de algunos aspectos del etiquetado ecológico, pero no los requisitos de transparencia básicos del Acuerdo OTC. A los exportadores tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo les interesaba impulsar la transparencia. El Canadá no preveía ninguna dificultad para integrar este proyecto de Decisión en una decisión general adoptada en la Conferencia Ministerial.

25. El representante de las Comunidades Europeas presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 23 de julio de 1996) sobre los programas voluntarios de etiquetado ecológico basados en el ciclo

de vida que es la primera de las categorías identificadas por la ISO (programas de etiquetado de terceros basados en criterios múltiples). La utilización de los programas voluntarios de etiquetado ecológico era compatible con el capítulo 4 del Programa 21 y restringía menos el comercio que otros instrumentos de política ambiental que producían obstáculos comerciales relacionados con los productos. Los sistemas voluntarios de etiquetado ecológico basados en el ciclo de vida no parecían estar plenamente amparados por el Acuerdo OTC y los criterios relativos a los PMP no relacionados con los productos no entraban dentro de la definición de una norma del anexo 1. La inclusión parcial de prescripciones en el Acuerdo OTC que excluían los criterios no relacionados con los productos no tenía sentido para el funcionamiento de los planes de etiquetado ecológico. Existían dos opciones para lograr un nivel adecuado de transparencia: i) intentar la inclusión plena en el Acuerdo OTC; o ii) negociar un instrumento *ad hoc*, por ejemplo, un código de conducta. Las CE consideraban que no era posible elaborar un acuerdo que se ocupara exclusivamente de los elementos respecto de los cuales había surgido cierto grado de consenso. Era inadecuado abordar la cuestión de la transparencia sin aclarar primeramente la posición del enfoque del ciclo de vida en el etiquetado ecológico voluntario. Las CE confiaban en que era posible lograr progresos en el etiquetado ecológico para alcanzar unos resultados equilibrados y globales en Singapur, teniendo presente, como se había acordado en otros foros, que el empleo del etiquetado ecológico basado en el ciclo de vida debía estimularse como un medio de ayudar a los consumidores a adoptar decisiones con conocimiento de causa y a promover modalidades sostenibles de producción y consumo. Las CE confiaban en que el proyecto del Canadá junto con otras propuestas contribuirían a un debate orientado a la obtención de resultados sobre el etiquetado ecológico. El proyecto del Canadá contenía algunos elementos valiosos, particularmente el reconocimiento de que los programas de etiquetado ecológico voluntarios se basaban primordialmente en el análisis del ciclo de vida y eran instrumentos eficaces fundados en el mercado para promover productos y servicios más favorables al medio ambiente. El párrafo cuarto del preámbulo era compatible con la posición de las CE. Sin embargo, las CE no podían estar de acuerdo en reconocer oficialmente en Singapur que los programas de etiquetado ecológico estaban amparados por el Acuerdo OTC ya que quedaría sin resolver la cuestión de saber si su empleo del análisis del ciclo de vida era compatible con la OMC. Como las CE no estaban convencidas de que esas cuestiones se pudieran separar, habría que aclarar primeramente el lugar que ocupaba el análisis del ciclo de vida en los acuerdos de la OMC. Las CE dudaban de la coherencia lógica del proyecto, particularmente al reconocer que todos los programas de etiquetado ecológico entraban en el ámbito del Acuerdo OTC y al indicar que la Decisión no prejuzgaría las opiniones sobre los PMP no relacionados con los productos. El proyecto de Decisión prejuzgaba esta última cuestión.

26. El representante de Nigeria no estaba de acuerdo en que cabía presumir que la elaboración de normas internacionales basadas en el análisis del ciclo de vida estaban abarcadas por el Acuerdo OTC tal como se indicaba en el proyecto de Decisión del Canadá. Preguntó si el Canadá estaría dispuesto a suprimir la segunda frase del párrafo 4.

27. El representante del Pakistán dijo que el etiquetado ecológico basado en los enfoques del ciclo de vida incluían procesos y métodos de producción no relacionados con los productos que tendían a restringir el acceso al mercado de los países en desarrollo y a socavar su ventaja comparativa. Antes de llegar a ninguna recomendación, era necesario realizar una labor analítica sobre la repercusión del etiquetado ecológico en las posibilidades comerciales de los países en desarrollo.

28. La representante de Sierra Leona manifestó su preocupación por el intento de incluir los procesos y métodos de producción no relacionados con los productos en el Acuerdo OTC. Aunque los enfoques del ciclo de vida eran un instrumento útil para evaluar la repercusión ambiental y deberían promoverse con el fin de mejorar la protección del medio ambiente, su aplicación actual se reducía a un aspecto del ciclo de la cuna a la tumba (habitualmente la etapa final de producción) en lugar de a todo el ciclo de vida de un producto. Un análisis exhaustivo del ciclo de vida llevaría tiempo y resultaría caro. La inclusión de los PMP no relacionados con los productos en el Acuerdo OTC resultaría desventajosa para las importaciones de los países en desarrollo y podría incluso no beneficiar al medio ambiente del país exportador. La decisión relativa a los factores que habría que considerar era subjetiva y el país importador podría no tomar en cuenta las capacidades ecológicas y prioridades ambientales de los demás países. La OCDE había

considerado que "autorizar a los países a discriminar contra las importaciones tomando como base su método de producción y las externalidades ambientales resultantes constituiría una característica difícil de controlar del sistema comercial. En muchos casos, tampoco tendría sentido desde el punto de vista ambiental debido a las diferencias de medio ambiente de un país a otro". La OCDE había señalado problemas prácticos en la aplicación de las medidas basadas en los enfoques del ciclo de vida, con inclusión de dificultades para determinar la repercusión ambiental de ciertos productos en comparación con las repercusiones de todos los productos, y el elevado costo de esta evaluación. El proyecto de Decisión del Canadá utilizaría como base la norma ISO 14.000. Ya se había reconocido que ISO 14.000 tenía que perfeccionarse en aspectos como el acceso público, la vinculación entre cumplimiento y comportamiento ecológico y los requisitos para su aplicación. Sería interesante conocer qué procedimientos se seguirían para la inspección y certificación en los países en desarrollo. Sierra Leona señaló las disposiciones deficientes del Acuerdo OTC sobre los conceptos de reconocimiento mutuo y equivalencias. Se hizo referencia al reconocimiento mutuo de los reglamentos técnicos, pero no de las normas, y no había referencia alguna a las equivalencias. Sugirió que el Comité de Comercio y Medio Ambiente examinara de qué manera se podían incluir el reconocimiento mutuo y las equivalencias en el Acuerdo OTC.

29. El representante de México pidió aclaraciones sobre la diferencia entre ámbito de aplicación y medidas y programas abarcados en el proyecto de Decisión del Canadá. Preguntó si las medidas obligatorias de etiquetado ecológico eran similares a los reglamentos técnicos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En caso afirmativo, no había duda alguna en cuanto a su inclusión. Preguntó si había algo nuevo en el proyecto de Decisión en comparación con el Acuerdo OTC existente. Con respecto al párrafo 4, pidió al Canadá que diera ejemplos de normas internacionales que se estuvieran estableciendo y preguntó si constituía una referencia directa a la labor de la ISO. En su opinión, este párrafo prejuzgaba la cuestión; la única forma de no prejuzgar la cuestión consistía en no referirse a ella. La posición de México era que los PMP no relacionados con los productos no estaban legitimados por las normas de la OMC. Para poder hacer progresos, habría que aclarar los efectos comerciales del etiquetado ecológico. Prefería examinar el etiquetado ecológico conjuntamente con las demás cuestiones del tercer punto y no aisladamente.

30. El representante del Japón dijo que existían elementos de la postura del Japón en el documento no oficial de las CE, como en los párrafos 8 y 10. Respaldo los primeros párrafos del preámbulo del proyecto de Decisión del Canadá. El Japón estaba de acuerdo en que la cuestión de los criterios basados en PMP no relacionados con los productos deberían seguir estudiándose.

31. El representante de Corea indicó que, si bien su delegación respaldaba el proyecto de Decisión del Canadá, Corea no estaba convencida de que los párrafos 1 y 5 fueran compatibles. La relación entre los enfoques basados en el ciclo de vida y el Acuerdo OTC debería aclararse antes de abordar los efectos comerciales de los programas de etiquetado ecológico. A este respecto, Corea compartía la opinión manifestada por las CE en el párrafo 13. Solicitó aclaraciones acerca del significado de las referencias al ámbito de aplicación y las medidas y programas abarcados, así como sobre la elaboración de normas internacionales basadas en el análisis del ciclo de vida. Corea consideraba prematuro extraer conclusiones parciales sobre el etiquetado ecológico dadas las repercusiones y las interrogaciones sin respuesta a que daba origen.

32. El representante de Hong Kong apoyó los párrafos 1, 2, 4 y 5 del proyecto de Decisión del Canadá. La recomendación contenida en el párrafo 4 sería más fácil de aceptar si la segunda línea del párrafo 4 dijera lo siguiente: "debe considerar, como parte de su programa de trabajo futuro, la necesidad de analizar el impacto ...". Pidió al Canadá que aclarara si la elaboración de normas internacionales basadas en el ciclo de vida repercutían en la interpretación de "productos similares".

33. La representante de Egipto dijo que era demasiado pronto para adoptar en Singapur una decisión sobre el etiquetado ecológico, que debería ser tratado globalmente después de Singapur.

34. El representante de Venezuela se declaró de acuerdo con Sierra Leona en que el análisis se debería centrar en el reconocimiento mutuo y en las equivalencias ambientales. Indicó que al hacerlo se debería

prestar atención a la labor realizada por la ISO y por el grupo de expertos sobre etiquetado ecológico del PNUMA.

35. El representante de Bangladesh dijo que el número creciente de programas de etiquetado ecológico para productos que los países en desarrollo tienen interés en exportar suscitaba preocupación. Se tenía la impresión de que tras los sistemas de etiquetado ecológico se ocultaba un elemento de proteccionismo. El costo para las empresas que deseaban cumplir los criterios del etiquetado ecológico podía ser considerable. Por ejemplo, un estudio de la India informaba que para algunas empresas los costos de los ensayos del producto destinados a cumplir los requisitos de la etiqueta ecológica danesa para el calzado podía producir un aumento de los costos de aproximadamente el 50 por ciento. Los programas de etiquetado ecológico se basaban en el enfoque del ciclo de vida, lo que significaba que los productos debían tener menos repercusiones sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida. Esto resultaba difícil de evaluar. Como la coexistencia de más de un programa de etiquetado ecológico para el mismo producto agravaba los problemas, era necesario armonizar los programas de etiquetado ecológico para reducir al mínimo las dificultades de los exportadores de los países en desarrollo. Los programas de etiquetado ecológico existentes se deberían examinar para conocer las preocupaciones de los países en desarrollo, que se deberían tener en cuenta al establecer etiquetas ecológicas. El análisis de los costos y beneficios de los programas de etiquetado ecológico sería útil. Se debería procurar llegar a un entendimiento multilateral de los criterios de las etiquetas ecológicas, dado que entrañaban juicios de valor. La proliferación de los programas de etiquetado ecológico sin un acuerdo multilateral marginarían aún más a los países menos adelantados. La oferta de asistencia técnica para ajustar los programas de etiquetado ecológico parecía tener por finalidad distraer la atención. La dimensión de desarrollo se debería vincular con la cuestión del etiquetado ecológico. El desarrollo de productos inocuos para el medio ambiente requeriría un volumen sustancial de financiación, que se debería incluir en la asistencia oficial para el desarrollo. El artículo 12 del Acuerdo OTC habría de tenerse igualmente presente. El etiquetado ecológico no podía tratarse como un *fait accompli* y todos sus aspectos deberían tomarse en consideración antes de llegar a una decisión.

36. El representante de la India dijo que el documento no oficial de su delegación sobre el tercer punto procuraba ampliar el ámbito del debate. No era el momento oportuno para que el Informe contuviera conclusiones sobre el etiquetado ecológico. El etiquetado ecológico voluntario no se había demostrado que fuera un instrumento eficaz basado en el mercado que promoviera productos y servicios preferibles desde el punto de vista ambiental en relación con las disposiciones de la OMC. La eficacia de los programas de etiquetado ecológico tenía que ponerse a prueba y examinarse más a fondo, particularmente con respecto a su impacto sobre los países en desarrollo. Como no se contaba con mucha experiencia con respecto a la repercusión de esos programas en los servicios, esta parte del proyecto de Decisión del Canadá podría examinarse más adelante. La India pidió aclaraciones sobre la repercusión del enfoque del ciclo de vida en las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. No estaba claro si el etiquetado ecológico promovería u obstaculizaría la adhesión de la OMC a un sistema comercial abierto, no discriminatorio y equitativo. En principio, la opinión de la India era que los requisitos de etiquetado ecológico, con inclusión del empleo de tecnologías y productos inocuos para el medio ambiente, debería evaluarse en futuros trabajos. Solicitó aclaraciones sobre la posibilidad de los países en desarrollo de participar con eficacia en la formulación de etiquetas ecológicas. Cuestiones como la de la transferencia de una tecnología adecuada y el empleo de criterios verificables y con una base científica eran importantes. Según la India, se debería hacer asimismo referencia a las disposiciones especiales de la OMC aplicables a los países en desarrollo, como el artículo 12 del Acuerdo OTC.

37. El representante de Australia afirmó que seguían existiendo diferencias de opinión sobre el grado en que las normas basadas en procesos y métodos de producción no relacionados con los productos estaban o deberían estar abarcadas por el Acuerdo OTC. Aunque era poco probable que se llegara a un acuerdo sobre esta cuestión en Singapur, debería ser posible convenir en la conveniencia de que los programas de etiquetado ecológico se incorporaran al Código de Buena Conducta del Acuerdo OTC. Se podría proceder en el futuro a examinar si este Código y las disposiciones del Acuerdo OTC eran adecuados para abordar las cuestiones que planteaban los programas de etiquetado ecológico. En el debate se debería hacer una distinción entre: i) la aplicabilidad del Acuerdo OTC a las etiquetas, independientemente del

tipo de información facilitada en la etiqueta; ii) las disciplinas que se deberían aplicar a los programas de etiquetado ecológico como órganos de normalización; y iii) la medida en que los criterios utilizados para otorgar las etiquetas a productos determinados eran normas (o reglamentos técnicos) tal como se definía en el Acuerdo OTC. Sobre el primer aspecto, había que tomar en consideración que la decisión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en el sentido de que la obligación de notificar los requisitos de etiquetado obligatorios "no depende del tipo de información facilitada en la etiqueta, tenga o no la índole de una especificación técnica". Aunque sólo se aplicaba a los requisitos de etiquetado obligatorios, señalaba el principio de que las etiquetas estaban amparadas por el Acuerdo OTC. Sobre el segundo aspecto, la mayor parte de los programas de etiquetado ecológico entrañaban algunos criterios relacionados con las características o el rendimiento de un producto. Con relación a estas actividades, el propio programa de etiquetado ecológico parecería corresponder claramente al ámbito del Acuerdo OTC como un órgano de normalización. Podrían existir dudas sobre la tercera cuestión relativa a la consideración de los criterios relativos a las características de los productos y con los procesos y métodos de producción relacionados con los productos y los criterios relativos a los PMP no relacionados con los productos. Un primer paso sería acordar en principio y en lo que respecta al Informe aceptar que el Acuerdo OTC abarcaba: i) las etiquetas ecológicas independientemente del tipo de información dado en la etiqueta; y ii) las prácticas de los programas de etiquetado ecológico como órganos de normalización. En los futuros trabajos en colaboración con el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio sobre la aplicación del Acuerdo OTC a los criterios utilizados por los programas de etiquetado ecológico se debería examinar en qué medida los criterios aplicados por esos programas son normas (o reglamentos técnicos) tal como se definían en el Acuerdo OTC y la idoneidad de las disciplinas relativas a los obstáculos técnicos al comercio, con inclusión del Código de Buena Conducta, para abordar los problemas que planteaban los programas de etiquetado ecológico.

38. El representante del Canadá aclaró que el proyecto de Decisión de su delegación se había presentado con relación al examen de la sección III del Informe. En cuanto a la relación entre ámbito de aplicación y cuestiones abarcadas, una distinción mejor podría ser entre ámbito de aplicación en un sentido general y en un sentido concreto. Los programas de etiquetado ecológico correspondían al ámbito general del Acuerdo OTC. Sin embargo, había que determinar si las medidas concretas de los programas de etiquetado ecológico como las normas basadas en PMP no relacionados con los productos correspondían al ámbito del Acuerdo OTC. En cuanto a las medidas y programas, el Canadá podía acceder a limitar la referencia a los programas. Dada la diferencia entre un reglamento técnico relativo a programas obligatorios y las normas relativas a programas voluntarios, la cuestión de los procesos y métodos de producción sólo guardaba relación con las últimas. La interpretación del Canadá del Acuerdo OTC era que en los párrafos 1, 2 y 3 del proyecto de Decisión no se añadía nada nuevo. Los programas de etiquetado ecológico estaban abarcados y deberían notificarse con arreglo al Acuerdo OTC, como había hecho el Canadá. No obstante, esta opinión no era universalmente compartida y tenía que reafirmarse explícitamente. En cuanto al párrafo 4, era útil reconocer la labor realizada en los foros internacionales sobre la elaboración de normas basadas en el enfoque del ciclo de vida. El Canadá reflexionaría sobre las sugerencias de redacción de Hong Kong y Sierra Leona. El Canadá no estaba seguro de que el enfoque del ciclo de vida repercutiera en los "productos similares" y esta cuestión podía ser objeto de examen en el futuro. La referencia a los servicios se debía al programa de etiquetado ecológico del Canadá que contenía varios criterios relacionados con los servicios.

Noveno punto: El programa de trabajo previsto en la Decisión sobre el Comercio de Servicios y el Medio Ambiente

39. El representante de la India presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 23 de julio de 1996), en el que se proponía que el Informe recomiende que este punto se incluya en la labor futura del Comité de Comercio y Medio Ambiente. Existía una Decisión Ministerial separada sobre este tema, en virtud de la cual el Consejo del Comercio de Servicios había encomendado el programa de trabajo contenido en la Decisión sobre el Comercio de Servicios y el Medio Ambiente al Comité de Comercio y Medio Ambiente y el examen de este Comité había sido exploratorio, habiéndose manifestado interés en proseguir el análisis.

Puntos primero y quinto: La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

La relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

40. La representante de Singapur, en nombre de la ASEAN, presentó la propuesta de su delegación (WT/CTE/W/39) relativa a la concesión de una exención plurianual, basada en un estudio de cada caso por separado, junto con la aplicación de directrices no vinculantes. La propuesta de la ASEAN se fundaba en una distinción entre medidas comerciales específicas y no específicas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y extendida a los AMUMA actuales y futuros. Las medidas comerciales concretas incluidas en los AMUMA podían reconocerse con respecto a cada caso por separado, como circunstancias excepcionales que daban derecho a la exención prevista en el artículo IX de la OMC, a reserva de la aplicación de directrices no vinculantes. Entre éstas figuraban la necesidad y los criterios conexos del grado mínimo de restricción del comercio, eficacia, proporcionalidad y grado de suficiencia de los testimonios científicos. En este contexto, había necesidad de examinar las medidas para evitar que se abusara de ellas con fines proteccionistas. A menudo se había alegado que las disposiciones comerciales discriminatorias frente a Estados no partes eran necesarias en los AMUMA para superar el problema de los "oportunistas". Aunque respaldaba los esfuerzos multilaterales destinados a abordar las preocupaciones ambientales, la ASEAN consideraba que no se deberían utilizar medidas comerciales discriminatorias para coaccionar a los países a que pasaran a ser signatarios de un AMUMA. En cambio, el problema de los oportunistas se debería resolver empleando medidas positivas y el comercio con países no partes se debería autorizar si un país no parte se ajustaba a los requisitos u obligaciones de un AMUMA. Las prescripciones relativas a la exención contribuirían a garantizar que las disposiciones comerciales discriminatorias frente a Estados no partes únicamente se emplearían si eran absolutamente necesarias para alcanzar los objetivos de un AMUMA. Con respecto a las medidas comerciales no específicas en aplicación de los AMUMA y la utilización de medidas comerciales unilaterales no derivadas de los AMUMA, la ASEAN era partidaria del mantenimiento del *statu quo*. Con arreglo al ámbito actual del artículo XX, no era posible adoptar esas medidas extrajurisdiccionales contra otros Miembros de la OMC para proteger recursos ambientales extrajurisdiccionales. Ésta seguiría siendo la situación. Los Miembros de la OMC debían acordar oficialmente no recurrir en el futuro a la utilización de medidas no específicas en aplicación de un AMUMA o a medidas comerciales unilaterales para proteger recursos ambientales extrajurisdiccionales. El derecho de los Miembros de la OMC a recurrir a un entendimiento sobre solución de diferencias (ESD) debería preservarse en lo que respecta a las medidas para las que se hubiera concedido una exención de conformidad con el Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. En armonía con el ESD, la ASEAN propuso que en el caso de diferencias relacionadas con el medio ambiente, los grupos especiales podrían recurrir a la utilización de expertos externos independientes. Las ventajas de una exención para varios años eran su carácter temporal, que daba la posibilidad de volver sobre la cuestión y que preservaba la función de la OMC como órgano regulador del comercio. La decisión de la mayoría exigía que para que un AMUMA concediera una exención debería reflejar un acuerdo en el sentido de que el problema ambiental en cuestión tenía un interés multilateral, sin que existiera la necesidad de que la OMC llegara a una definición de un AMUMA. En opinión de la ASEAN, la Conferencia Ministerial era un punto en una línea continua y no el punto final. Dijo que el debate se había centrado en el primer punto y que se había ocupado de manera inadecuada del acceso al mercado con relación al sexto punto, que debería mantenerse en perspectiva ya que los países dependían del comercio como fuente de crecimiento económico.

41. El representante de Hong Kong presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 22 de julio de 1996), que señalaba: i) la percepción por los negociadores de un AMUMA de las obligaciones de la OMC; ii) la situación de las medidas comerciales basadas en un AMUMA en el contexto de las normas de la OMC; y iii) las competencias respectivas de las disposiciones de solución de diferencias de la OMC

y de los AMUMA. Al responder a estas cuestiones, el Comité de Comercio y Medio Ambiente llevaría a cabo una de sus principales tareas, a saber: velar por la compatibilidad de las medidas comerciales en los AMUMA y en la OMC. Hong Kong proponía: i) que la OMC proporcionara a los negociadores de un AMUMA el mejor asesoramiento posible para promover la compatibilidad de las medidas comerciales basadas en un AMUMA con la OMC, sin intervenir en las negociaciones del AMUMA. Con este fin, Hong Kong proponía el establecimiento de una pauta de la OMC que sirviera de referencia a los negociadores de los AMUMA en la que se establecieran los principios y obligaciones de la OMC que habría que respetar al tomar en consideración las medidas comerciales en el AMUMA. Esta pauta se complementaría con reuniones de información entre los AMUMA y la OMC por conducto de sus secretarías respectivas, que abarcarían, entre otras cosas, las medidas comerciales que se estaban considerando para incorporarlas al AMUMA y las disposiciones de la OMC pertinentes para su utilización; ii) que se concebiría un dispositivo por medio del cual se podría otorgar una exención para varios años a las medidas comerciales adoptadas en aplicación de un AMUMA, a reserva de que se cumplieran ciertos criterios. Hong Kong propuso que se estableciera un conjunto de directrices para otorgar una exención plurianual basada en los criterios que figuraban en la nota de introducción del artículo XX del GATT y prever pruebas de un consenso internacional auténtico, la mínima incompatibilidad con las disposiciones de la OMC, el grado mínimo de restricción del comercio, la eficacia y la proporcionalidad. En lo que respecta a las medidas comerciales indicadas específicamente en un AMUMA, podía renunciarse a la prueba de la necesidad con arreglo al artículo XX. Una exención de varios años, una vez otorgada, estaría sometida al procedimiento de examen sumario en forma de un "examen negativo". El examen permitiría el otorgamiento de una prórroga anual, a condición de que no hubiera habido cambios en las circunstancias originales que habían justificado la exención. Esto daría seguridad a las acciones legítimas destinadas a resolver los problemas ambientales durante un período largo de tiempo; iii) que los Miembros de la OMC que fueran Partes en un AMUMA podrían optar, voluntariamente y sobre la base del consentimiento mutuo, por resolver las diferencias en los mecanismos de solución de diferencias del AMUMA. Cualesquiera Miembros de la OMC que desearan recurrir al ESD para resolver una diferencia relacionada con una medida comercial basada en un AMUMA debían ser autorizados a hacerlo, independientemente de que el Miembro fuera Parte en un AMUMA y de las disposiciones relativas a la solución de diferencias del AMUMA a que se pudiera recurrir.

42. El representante de la India presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 23 de julio de 1996) sobre los puntos primero y quinto, en el que se describía la opinión de la India de que la experiencia adquirida con el mecanismo de solución de diferencias del GATT/OMC para tratar de las medidas comerciales con fines ambientales, incluso las aplicadas de conformidad con los AMUMA, no había demostrado que existiera la necesidad de recomendar cambios en las disposiciones existentes del GATT 1994. Estas disposiciones eran adecuadas para tratar de las medidas comerciales incluidas en los AMUMA existentes. Al analizar las medidas comerciales incluidas en los AMUMA aisladamente de otras medidas y no limitadas a los AMUMA existentes que cumplían ciertos criterios, el Comité de Comercio y Medio Ambiente podría estimular la dependencia de las medidas comerciales para alcanzar los objetivos ambientales, legitimando de ese modo la utilización unilateral de medidas comerciales como sanciones contra los países para imponer cuestiones no comerciales. Las disposiciones vigentes del ESD parecían adecuadas para atender a cualquier solicitud de proporcionar expertos ambientales en los casos de diferencias que entrañaran medidas ambientales relacionadas con el comercio. Teniendo en cuenta el interés de esta cuestión y el carácter evolutivo de la OMC, la India sugería que se siguiera examinando después de la Conferencia Ministerial.

43. El representante de Venezuela pidió a la ASEAN que aclarara si la exención plurianual propuesta se refería a la medida comercial incluida en el AMUMA o al propio AMUMA. Venezuela no era partidaria de que se renunciara a los derechos de la OMC de los Estados no partes en el AMUMA.

44. El representante de México respaldó las recomendaciones propuestas por la India en el sentido de que se incluyera en el Informe que las disposiciones de la OMC eran adecuadas para tratar de las medidas comerciales en los AMUMA; esas medidas comerciales deberían tener en cuenta las disposiciones de la OMC; y el ESD era adecuado para resolver cualquier diferencia comercial relacionada con el medio ambiente. Los problemas futuros podrían estar ocasionados por una falta de coordinación en el plano

nacional, pero no por ninguna deficiencia de las disposiciones de la OMC. Una ventaja importante de la OMC era que sus disposiciones no se ajustaban a las necesidades de la política no comercial. Esta característica de la OMC era la que garantizaba la libertad de los gobiernos de adoptar políticas ambientales de conformidad con sus prioridades sin infringir las normas de la OMC.

45. El representante de Nigeria dijo que las propuestas relativas a este punto revelaban la complejidad de los problemas y la necesidad de proseguir un debate sobre el primer punto abierto, representativo y transparente. Estaba de acuerdo con la India en que una cooperación internacional basada en medidas positivas para resolver las externalidades ambientales era preferible a medidas comerciales discriminatorias. Había la necesidad de distinguir, como lo hacían la ASEAN y Corea, entre las medidas comerciales específicas y no específicas en los AMUMA, y de excluir las medidas unilaterales. La propuesta de Hong Kong de que se estableciera una pauta de la OMC merecía ser examinada. Basándose en un conjunto de directrices, la exclusión de la prueba de la necesidad representaba una solución de transacción que debería tomarse meticulosamente en cuenta. Una exención plurianual ofrecería la posibilidad de vigilar la relación problemática entre los AMUMA y la OMC. En apoyo de la propuesta de la India, dijo que era hora de pensar en un programa de trabajo estructurado del Comité de Comercio y Medio Ambiente para el período posterior a Singapur teniendo en cuenta las propuestas actuales.

46. La representante de Egipto entendía que se había convenido en que no habría límite alguno a las propuestas por escrito. Reiteró las observaciones de Egipto sobre el primer punto que se habían distribuido a las delegaciones (con fecha 18 de junio de 1996). Antes de evaluar cualquier propuesta, habría que definir como un punto de partida necesario lo que constituía un AMUMA. Egipto era partidario del *statu quo* tal como figuraba en el artículo XX, junto con el método de la exención *ex post*. La exención plurianual de la ASEAN combinada con una pauta de la OMC debería ser examinada en el programa de trabajo posterior a Singapur del Comité de Comercio y Medio Ambiente.

47. El representante de Suiza afirmó que el objetivo correspondiente a este punto estribaba en determinar las relaciones entre dos instrumentos de derecho internacional sobre una base duradera sin crear ninguna relación jerárquica entre ellos. La utilización del método de la exención, incluso sobre una base multianual, obligaría a los Miembros a respetar un calendario. El artículo IX de la OMC preveía exenciones en circunstancias excepcionales. Como un AMUMA negociado con una amplia participación no podía considerarse una circunstancia excepcional, Suiza tenía reservas con respecto al enfoque basado en la exención. Por otro lado, los criterios de la ASEAN para conceder una exención constituían una interpretación restrictiva de las normas de la OMC. Consideraba que la propuesta de la ASEAN impondría limitaciones adicionales y restringiría la utilización de medidas comerciales en los AMUMA que eran necesarias para alcanzar sus objetivos ambientales.

48. La representante de Sierra Leona respaldó los esfuerzos destinados a abordar los problemas ambientales transfronterizos basados en el consenso multilateral y reconocía la utilidad de las restricciones comerciales impuestas en un AMUMA con una amplia participación. No obstante, los esfuerzos por ajustar esas medidas a la OMC podían conducir a un abuso proteccionista y restringir el comercio. Sierra Leona no estaba en favor de colocar los intereses comerciales por encima de la protección del medio ambiente. Como nunca había habido una diferencia oficial que entrañara una medida comercial incorporada a un AMUMA y la OMC preveía excepciones que podían utilizarse para la protección ambiental, tenía dudas en cuanto a la magnitud del problema. Era preciso volver a evaluar las dificultades a la luz del Informe del Órgano de Apelación sobre la Gasolina Reformulada. Después de analizar este Informe y de considerar las propuestas actuales sobre este punto, Sierra Leona consideraba que la interpretación del artículo XX estaba evolucionando de una manera que podía resultar beneficiosa para la protección ambiental. Se preguntaba si este proceso debía ser obstaculizado con nuevas normas y criterios. La meta era proporcionar una protección ambiental sin que esas medidas se transformasen en obstáculos al comercio innecesarios. La interpretación del Órgano de Apelación del artículo XX podía abordar esta cuestión. La medida debía ajustarse a alguna de las excepciones previstas en los apartados b), d) o g) del artículo XX. Por ejemplo, para cumplir los requisitos previstos en el apartado g), una medida no tenía que ser "necesaria". Esto hacía pensar en que era más fácil de lo que se había creído justificar una medida

con arreglo a lo dispuesto en el artículo XX. Una vez que se había comprobado que se ajustaba a alguna de las excepciones, la medida se consideraba con arreglo a la nota de introducción del artículo XX. Según el Informe del Órgano de Apelación, la finalidad de la nota de introducción era "evitar una utilización abusiva o ilegítima de las excepciones a las normas sustantivas estipuladas en el artículo XX" y no tenía por objeto ser restrictiva, sino que estaba destinada a garantizar que no se abusara de las excepciones. Este era el tipo de efecto que el Comité de Comercio y Medio Ambiente esperaba lograr con respecto a esta cuestión. Este enfoque doble autorizaba excepciones de la OMC con respecto a las medidas ambientales si no constituían una restricción del comercio injustificable. En los exámenes futuros se podía analizar el Informe del Órgano de Apelación, a la luz del cual se podría convenir una declaración interpretativa sobre cómo entendían los Miembros de la OMC el artículo XX. Esto contribuiría a determinar si existía un problema y a poner al descubierto su índole.

49. Sierra Leona consideraba que la propuesta de la ASEAN con respecto a una exención era útil ya que propugnaba un enfoque cauteloso con respecto a un problema complejo. Sin embargo, una exención implicaba asimismo un conflicto fundamental entre los AMUMA y la OMC que socavaría la igualdad de las obligaciones jurídicas con arreglo a ambos sistemas. Una exención incluiría una referencia a las "circunstancias excepcionales" que servirían de base para obtenerla, lo que hacía pensar en que el AMUMA se había tolerado. Cuando el comercio era la causa del problema ambiental global, las medidas comerciales habían resultado útiles para ayudar a los organismos nacionales a presentar las opciones políticas óptimas para abordar el problema ambiental. Cuando el comercio no era la causa y no serviría de catalizador para recurrir a las opciones políticas óptimas, habría que evitar las medidas comerciales. El problema del oportunista debería abordarse por medio de la transferencia de tecnologías y de asistencia técnica; el comercio no debía utilizarse para coaccionar a los países a ser partes en los acuerdos. En cuanto a la referencia de la ASEAN a la necesidad de certidumbre y previsibilidad, Sierra Leona consideraba que convenía hacer una distinción entre las medidas restrictivas del comercio específicamente impuestas en un AMUMA, las medidas restrictivas del comercio autorizadas o previstas en un AMUMA y las medidas restrictivas del comercio relacionadas con la aplicación de un AMUMA, con inclusión de las medidas nacionales destinadas a poner en práctica los compromisos en el marco de un AMUMA. La cuestión consistía, por tanto, en saber cómo distinguir entre las medidas restrictivas del comercio de la última categoría y las medidas unilaterales adoptadas con fines proteccionistas.

50. Sierra Leona no estaba convencida de la utilidad de las directrices no vinculantes. Al examinar los criterios que figuraban en varias propuestas, el grado mínimo de restricción del comercio y la proporcionalidad eran elementos de "necesidad" tal como lo habían interpretado los grupos especiales. Estaba de acuerdo en que en las normas de la OMC no se recurría a la eficacia y en que los grupos especiales de la OMC no habían hecho referencia a ella en sí. No obstante, la eficacia estaba también implícita en la "necesidad". El Órgano de Apelación había puesto en duda con razón la "prueba de los efectos" en lo que respecta a las medidas relacionadas con la conservación de los recursos naturales debido al retraso en la observación de sus efectos. Entendía que la idea de la eficacia empleada en varias propuestas no ponía en tela de juicio la utilidad de una medida particular para alcanzar su meta, sino la elección de esa medida como el método más eficaz disponible. Sugirió que se hiciera referencia al principio de la "eficacia" como el principio del "enfoque óptimo". Este principio ya se utilizaba en los foros internacionales, en especial conjuntamente con el reconocimiento de que los problemas ambientales era preferible abordarlos en su fuente. Al considerar estos dos principios juntos, el empleo de opciones de política como la transferencia de tecnología y la asistencia técnica con fines ambientales era preferible a las medidas restrictivas del comercio. Sierra Leona apoyaba el llamamiento de la ASEAN para que el centro de atención pasara del primer punto al sexto punto. Estaba de acuerdo con Nigeria en la necesidad de un debate transparente y amplio y en que esas cuestiones se incluyeran en la labor futura.

51. El representante de Corea dijo que las propuestas de la ASEAN y de Hong Kong eran alentadoras ya que adoptaban enfoques basados en la especificidad de la medida comercial y preservaban el derecho de los Miembros de la OMC a invocar el ESD. Apoyó las observaciones contenidas en el párrafo 2 del documento no oficial de Hong Kong. Preguntó quién evaluaría los criterios relativos a las directrices no vinculantes y a la "revisión negativa" y cómo. Dijo que el método de la "revisión negativa" daría más

flexibilidad a la utilización de una exención. Pidió aclaraciones sobre el párrafo 20 del documento de la ASEAN.

52. El representante de las Comunidades Europeas se mostró desalentado por la falta de ambición en el Comité de Comercio y Medio Ambiente con respecto a este punto. Estaba de acuerdo con Suiza en que el objetivo no era dificultar la labor de los negociadores de los AMUMA. De ser necesario, se deberían elaborar normas para aumentar la relación positiva entre los AMUMA y la OMC y lograr resultados positivos en Singapur. En el examen de la relación entre la OMC y los AMUMA, se había dedicado mucho tiempo a la función del apartado b) del artículo XX. Los cambios en la jurisprudencia resultantes del Informe del Órgano de Apelación sobre la Gasolina Reformulada indicaban la importancia del apartado g) del artículo XX en la solución de problemas relacionados con el comercio y el medio ambiente. Las medidas comerciales incluidas en los AMUMA podían estar igualmente amparadas por los apartados b) y g) del artículo XX y deberían tratarse caso por caso. Aunque elementos del Informe del Órgano de Apelación deberían incluirse en el debate, el Informe no había resuelto la relación entre los AMUMA y las normas de la OMC. Persistía la incertidumbre jurídica existente en el origen del debate.

53. El representante del Japón se sentía estimulado por las propuestas de la ASEAN y de Hong Kong, que mostraban que aceptarían algunos criterios y que contenían cierta base común con la propuesta del Japón. Las disciplinas de la OMC aumentarían la previsibilidad y la certidumbre jurídica y evitarían conflictos. Con este fin, la utilización exclusiva de una exención no bastaba. Para obtener resultados positivos en Singapur, habría que dar pruebas de flexibilidad. Con el fin de facilitar el consenso, el Japón estaba dispuesto a apoyar un examen basado en disciplinas diferenciadas para los AMUMA en función de la definición de medidas comerciales específicas y no específicas que figuraran en los AMUMA.

54. El representante de Colombia respaldó el análisis de las cuestiones efectuado por la India, especialmente el párrafo 15. Colombia no estaba convencida de la necesidad de modificar las normas de la OMC dado que las disposiciones vigentes representaban un marco adecuado para abordar las medidas relacionadas con el comercio contenidas en los AMUMA.

55. El representante del Pakistán se declaró de acuerdo con Nigeria en que el debate sobre este punto no había sido exhaustivo y debería continuar después de Singapur.

56. El representante de los Estados Unidos dijo que las observaciones de su delegación sobre el documento no oficial de Hong Kong se aplicaban asimismo al documento de la ASEAN. El enfoque de la exención no era un mecanismo adecuado para aclarar la relación entre las medidas comerciales de un AMUMA y la OMC. La exención del artículo IX de la OMC había sido concebida para prever una derogación temporal a las obligaciones dimanantes de la OMC y no para dar entrada a acuerdos internacionales. Los Estados Unidos abrigaban dudas acerca de la pauta de la OMC propuesta por Hong Kong dado que las obligaciones de la OMC ya estaban compiladas en el Acta Final y que era difícil imaginar una versión resumida; todo intento de crear una probablemente aumentaría la confusión en lugar de aclarar la situación, como ocurre con los "productos similares" para los cuales no existe ninguna definición establecida. La búsqueda del equilibrio correcto para abordar la relación entre los AMUMA y la OMC era una ardua tarea. Los Estados Unidos habían dedicado tiempo en el plano nacional a esa labor sin haber llegado a elaborar una propuesta que describiera esta relación cambiante de una manera que tuviera en cuenta sus complejidades. Se debe adoptar un enfoque equilibrado para obtener la confianza de los decisores de la política comercial y la política ambiental. Era esencial lograr una estrecha coordinación entre los funcionarios encargados del comercio y del medio ambiente en los planos nacional e internacional, con inclusión del Comité de Comercio y Medio Ambiente. A este respecto, se refirió a la reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica para elaborar un protocolo sobre bioseguridad, en la que las delegaciones habían adoptado posiciones con respecto a las medidas comerciales que estaban en contradicción con sus posiciones en el Comité de Comercio y Medio Ambiente. Las disposiciones comerciales de los AMUMA no se habían impugnado y podían evitarse logrando que funcionarios comerciales participaran en las negociaciones de un AMUMA relacionados con el comercio. Los elementos comunes de la relación entre las medidas comerciales de un AMUMA y la OMC eran los

siguientes: un amplio reconocimiento de que la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente deberían apoyarse mutuamente en favor del desarrollo sostenible; los AMUMA eran importantes para abordar los problemas ambientales mundiales; el empleo de medidas comerciales en los AMUMA seguiría siendo un instrumento eficaz para alcanzar objetivos ambientales mundiales; las medidas comerciales no siempre se necesitaban y deberían utilizarse con prudencia; las normas de la OMC deberían prever una flexibilidad suficiente para que las medidas comerciales se pudieran utilizar en los AMUMA; al negociar medidas comerciales en los AMUMA entre las Partes, los gobiernos deberían examinar de qué modo tenían la intención de relacionar esas disposiciones con las normas de la OMC; un Estado no parte en un AMUMA no sería discriminado si adoptara medidas equivalentes a las exigidas a las Partes; la coordinación entre los funcionarios comerciales y ambientales en las capitales era importante; y la evitación de las diferencias implicaba garantizar la participación de funcionarios comerciales en las negociaciones de los AMUMA.

57. El representante del Canadá recordó la intervención de su delegación en la reunión de junio de 1996, en la que se examinaron las propuestas y se esbozó la postura del Canadá. Las deliberaciones recientes habían dado a entender la necesidad de elaborar los objetivos del Canadá y establecer los puntos de convergencia. Aunque existían considerables diferencias de enfoque en las propuestas, había acuerdo en cuanto a las cuestiones más y menos difíciles. Para formular recomendaciones a los Ministros en Singapur, el Comité de Comercio y Medio Ambiente debía ponerse de acuerdo sobre los elementos comunes de las propuestas. Aunque el Canadá ya no era partidario de una exención del artículo IX para dar cabida a los AMUMA, era útil que esta opción se sometiera a examen. Entendía que otra delegación podía presentar un documento en el que se propusiera que no era necesario ningún cambio del *statu quo*. Confiaba en que tendría en cuenta el Informe del Órgano de Apelación sobre la Gasolina Reformulada con respecto a la aclaración de diversos párrafos y de la nota de introducción del artículo XX. Si bien los delegados ante la OMC actuaban en su capacidad de funcionarios comerciales, representaban la postura de sus gobiernos en conjunto. De la misma manera que se esperaba que los colegas encargados del medio ambiente tuvieran en cuenta en las negociaciones de un AMUMA las consideraciones comerciales, los funcionarios comerciales de la OMC tenían que tener en cuenta las consideraciones ambientales para que el comercio y el medio ambiente se respaldaran mutuamente. La atención se debería concentrar en la manera de evitar los conflictos entre los AMUMA y la OMC y no debería parecer que socava lo convenido multilateralmente en otros foros. Este último enfoque provocaría críticas innecesarias de la OMC y no representaba una buena política comercial ni ambiental.

58. El representante de Nigeria se declaró de acuerdo con los Estados Unidos en que era necesario coordinar a los funcionarios encargados del comercio y del medio ambiente y no modificar las normas de la OMC.

59. El representante del Perú opinó que no era aconsejable modificar el artículo XX. Entre las propuestas que se habían presentado, había un conjunto de diversas opciones que permitirían llegar a un consenso sobre esta cuestión.

60. La representante de Hong Kong respondió a las observaciones hechas sobre el documento no oficial de su delegación, que se debería examinar a la luz del mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente. No debería existir ninguna confusión entre "si se exigen modificaciones" y "qué modificaciones se exigen" ya que estas últimas no se podían dar por supuesto. Suiza había formulado observaciones sobre la conveniencia de aplicar el enfoque de la exención a las medidas comerciales basadas en un AMUMA y había dicho que existían dos sistemas multilaterales diferentes. El empleo de una exención era adecuado ya que resolvía las incompatibilidades entre los AMUMA y la OMC sin dar prioridad a un sistema jurídico con respecto al otro. El hecho de que las exenciones previeran excepciones a largo o medio plazo de la OMC indicaba su validez para resolver los problemas ambientales. Sólo si una exención no podía resolver los problemas se plantearía la cuestión de modificar las disposiciones de la OMC; esto no sucedía en el presente caso. Suiza y las CE habían señalado las circunstancias "excepcionales" de la concesión o renovación de exenciones. Si fuera el carácter "excepcional" de las circunstancias el que motivaba la objeción a su utilización, Hong Kong desearía saber más acerca de los argumentos en que se asentaba. Las excepciones no deberían convertirse en la norma. Apreciaba el comentario de Nigeria de que la exclusión

de la prueba de necesidad se debería tomar en consideración cuidadosamente con respecto a las exenciones relativas a las medidas comerciales basadas en un AMUMA. Las propuestas de Hong Kong eran ambiciosas. Dijo que los Miembros de la OMC deberían poner a prueba la aplicabilidad de las directrices con respecto a una exención y la del método de la revisión negativa al tomar una decisión sobre una exención plurianual. Estaba de acuerdo con los Estados Unidos en que no era posible proporcionar una orientación exhaustiva con relación a los principios de la OMC. Sin embargo, la propuesta de Hong Kong de promover las comunicaciones entre la OMC y los órganos de los AMUMA sería útil a este respecto.

61. El representante de los Estados Unidos dijo que cualquier solución del primer punto no debería crear otros problemas. Una de las preocupaciones manifestadas durante la Ronda Uruguay era que las exenciones a las que se tenía la intención de dar una duración limitada estaban pasando a ser características permanentes del sistema. Se declaró de acuerdo con Hong Kong en que sería útil que las Secretarías de los AMUMA y de la OMC se consultaran, pero la solución estribaba en promover la cooperación en las delegaciones nacionales.

62. El Presidente aclaró que, como se había convenido al efectuarse el balance de situación en mayo, esta reunión era la última oportunidad de presentar nuevas propuestas. Con todo, las delegaciones podrían presentar propuestas basadas en las que ya habían presentado con miras a crear un consenso sobre las conclusiones y recomendaciones, de haber alguna, sobre los puntos del programa de trabajo.

Cuarto punto: Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos

63. El representante de Hong Kong dijo que la propuesta de su delegación relativa a una base de datos ambientales (documento no oficial de fecha 28 de mayo de 1996) podía ampliarse a partir de la información contenida en el Registro Central de Notificaciones (RCN). Como se señalaba en el documento WT/CTE/W/34 se podía obtener información secundaria a partir del RCN sobre las medidas ambientales relacionadas con el comercio, con inclusión de las modalidades y tipos de medidas y el número de notificaciones. Era evidente que no se dispondría de cierta información, como el volumen del comercio de que se tratase, o la conformidad de las medidas de la OMC. En cuanto a la necesidad de evitar duplicaciones en el caso de los servicios de información ambiental propuestos, Hong Kong sugirió que los Miembros podrían facilitar información sobre las medidas ambientales relacionadas con el comercio por intermedio de los servicios de información nacionales existentes o nuevos o de las autoridades pertinentes.

64. El representante del Japón apoyó la propuesta de Hong Kong relativa al establecimiento de una base de datos en la inteligencia de que cualquier obligación de notificación adicional no resultaría gravosa.

65. El representante del Perú dijo que las propuestas de Hong Kong destinadas a promover la transparencia eran positivas. Sin embargo, la propuesta relativa al Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) destinada a incluir las medidas ambientales relacionadas con el comercio no era compatible con sus objetivos en la medida en que podía crear obligaciones adicionales para el Miembro objeto de examen.

66. El representante de Nigeria recordó que el MEPC no estaba destinado a servir de base para imponer el cumplimiento de obligaciones específicas con arreglo al ESD o a imponer nuevos compromisos normativos.

67. El representante de los Estados Unidos dijo que los servicios de información previstos en los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio habían requerido una considerable inversión, pero que los Estados Unidos habían consignado los recursos necesarios ya que esos servicios de información eran importantes para el funcionamiento eficaz de dichos Acuerdos. Para asignar a esos servicios de información nuevas responsabilidades amplias haría falta proporcionar recursos adicionales. Afirmó que la ventaja de un servicio de información ambiental no era

evidente y que las medidas ambientales no requerían un volumen mayor de investigación que cualesquiera otras medidas.

Sexto punto: El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

68. El representante de los Estados Unidos presentó el documento de su delegación (WT/CTE/W/35) en el que se ampliaban las propuestas de la Argentina y Australia para poder llegar a un terreno común. Aunque los elementos concretos del documento estaban relacionados con el sector agrícola, la teoría económica que defendían era pertinente para casi todos los segmentos de la economía de cualquier país. El efecto de la liberalización del comercio en la calidad del medio ambiente dependía de lo que sucediera en el plano de la actividad económica y la contaminación conexa, los cambios intersectoriales en la actividad económica y los cambios en los métodos de producción. Los efectos dependían igualmente de que ya existiera una protección ambiental adecuada u óptima. Unas políticas ambientales bien concebidas y aplicadas era más probable que garantizaran que la liberalización del comercio produciría un crecimiento económico y un mejoramiento ambiental. A largo plazo, el crecimiento económico y el aumento de los ingresos engendrados por una liberalización del comercio podían dar origen a una mayor preferencia social y a que se pusieran a disposición recursos para lograr mejoras del medio ambiente. La eliminación de las distorsiones agrícolas que afectaban al precio relativo de los alimentos y a los precios de los insumos agrícolas unida a la aplicación de unas políticas ambientales idóneas modificaría los incentivos económicos y beneficiaría al medio ambiente. El Comité de Comercio y Medio Ambiente debería identificar situaciones "sin perdedores" en otras esferas igualmente. Recordó las cinco tesis destacadas en el documento. El Comité de Comercio y Medio Ambiente tenía necesidad de presentar un Informe positivo en el que se recomendará a los Ministros que aprobaran los principios contenidos en el párrafo 34 del documento de los Estados Unidos para que la OMC pudiera seguir promoviendo la meta del desarrollo sostenible.

69. El representante de Australia presentó el documento de su delegación (WT/CTE/W/36) en el que se señalaba que un tema fundamental para la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente era la relación entre la liberalización del comercio, el medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Indicó que en el preámbulo del Acuerdo de Marrakech se establecía el deseo claramente manifestado de los Miembros de la OMC de establecer sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y económica de manera que se posibilitara la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo del desarrollo sostenible. En el párrafo 3, Australia proponía cuatro elementos fundamentales que debían figurar en el Informe. En el párrafo 4 figuraba una recomendación de un programa de trabajo permanente. En el documento se esbozaban asimismo algunas cuestiones que deberían abordarse en relación con los países de bajos ingresos dependientes de productos básicos y con la reforma del comercio de productos agropecuarios. El documento tenía por finalidad lograr que la Conferencia Ministerial aprobara una posición positiva acerca de la contribución de un sistema comercial multilateral fuerte a la promoción del desarrollo sostenible. La OMC no podía ignorar el interés creciente de la comunidad por su labor y las manifestaciones de preocupación de que sus objetivos estuvieran en conflicto con la promoción de la calidad ambiental. El debate sobre comercio y medio ambiente suscitaba dificultades y aportaba oportunidades para la OMC. Las dificultades estaban relacionadas con el peligro de que los intereses proteccionistas se sirvieran de justificaciones ecológicas para poner barreras comerciales. Incluso cuando no tenían una intención proteccionista, algunas medidas ambientales seguían teniendo la posibilidad de crear obstáculos al comercio. Esas dificultades ponían de manifiesto la necesidad de diálogo y cooperación para que los países pudieran abordar las preocupaciones ambientales de manera que no se crearan barreras innecesarias al comercio. A los países en desarrollo, en particular, les preocupaba que su acceso a los mercados y a la competitividad pudieran verse afectados por iniciativas ambientales, como los programas de etiquetado ecológico. Las posibilidades estaban relacionadas con el mayor interés de la comunidad por la labor de la OMC que había suscitado el debate sobre el comercio y el medio ambiente. Ese debate daba la ocasión de captar la atención del público a la función que desempeñaba la OMC en la promoción del desarrollo sostenible. El Comité de Comercio y Medio Ambiente constituía un foro para examinar las cuestiones y determinar el papel que debería desempeñar la OMC para evitar que las medidas

ambientales se convirtieran en obstáculos innecesarios al comercio. Australia pidió que su documento dejara de tener carácter reservado.

70. La representante de las Comunidades Europeas presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 19 de julio de 1996). Los enfoques de política general adoptados con respecto a este punto era probable que determinaran las posturas con respecto a otros puntos, por lo que resultaba esencial lograr un equilibrio entre los aspectos del debate relativos al comercio, el medio ambiente y el desarrollo. En principio, la comunidad comercial debería estar satisfecha de la elaboración de tipos nuevos de medidas ambientales, como el etiquetado ecológico voluntario, que tendrían a ser menos restrictivas del comercio que las medidas tradicionales. Como esos instrumentos podían crear obstáculos indirectos al comercio, las CE entendían las preocupaciones de los países en desarrollo a este respecto. Sin embargo, como se señalaba en el documento WT/CTE/W/26, "a falta de información sobre las condiciones en que una medida determinada se aplica, son pocas las generalizaciones que se pueden hacer sobre la probabilidad de que genere comercio o de que lo desvíe o restrinja". Existía una clara conexión con los puntos segundo y tercero y con la cuestión del establecimiento de un marco de principios comerciales que se pudieran aplicar a las medidas ambientales. Las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente y que tenían en cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo eran pertinentes. En el párrafo 7 se esbozaban las consideraciones que deberían servir de base al análisis caso por caso efectuado por el Comité de Comercio y Medio Ambiente de los nuevos instrumentos de política ambiental y de las disposiciones de la OMC.

71. El documento no oficial esbozaba la opinión de que el crecimiento promovido por el comercio no tenía por qué ser incompatible con el desarrollo sostenible. Un sistema comercial multilateral abierto posibilitaba una utilización más eficiente de los recursos para alcanzar un nivel determinado de ingresos. La eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio era particularmente importante para todos los países, incluidos los países en desarrollo y los países menos adelantados, para promover su integración en la economía mundial. La conclusión de la Ronda Uruguay constituía un gran logro y convenía que los compromisos asumidos en la Ronda se pusieran en práctica con el fin de lograr que los beneficios potenciales se realizaran. Sin embargo, los beneficios ambientales no eran automáticos y exigían la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible y de políticas ambientales eficaces en los planos nacional e internacional. No era el nivel de producción, sino los medios de producción los que resultaban importantes para lograr una agricultura sostenible. Los mecanismos del mercado sólo conseguirían una asignación óptima de los recursos desde el doble punto de vista económico y ecológico con la plena internalización de los costos ambientales. La agricultura sostenible dependía de un marco coherente que abarcara factores ambientales, sociales y económicos. Se necesitaban políticas de desarrollo rural regional estructural y de utilización de la tierra, con inclusión de medidas no distorsionantes (como la Caja Verde), para lograr los elementos ambientales y sociales que formaban parte del paisaje agrícola. Los nuevos trabajos deberían tener en cuenta estas consideraciones, con inclusión de la remisión a las actividades en curso en el CSD, la UNCTAD, la OCDE y la FAO. Aunque el documento WT/CTE/W/25 ayudaba a identificar las zonas de productos en las que la progresividad arancelaria era probable que causara las máximas distorsiones, las vinculaciones no eran automáticas. Como el comercio, en sí, raramente era la causa directa de mejoras o daños del medio ambiente, eran los beneficios indirectos de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio más que sus beneficios directos los que representaban un valor ambiental. Las conexiones entre las estructuras arancelarias, las restricciones a la exportación, la dependencia de productos básicos y el medio ambiente tenían que ser examinadas a fondo. El párrafo 25 del documento no oficial enumeraba los sectores en los que habría que seguir trabajando. Entre las situaciones "sin perdedores", el Comité de Comercio y Medio Ambiente debería examinar el alcance de los enfoques multilaterales con respecto al establecimiento de incentivos positivos para estimular una producción ambiental inocua.

72. El representante de Corea presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 24 de julio de 1996), que reflejaba la preocupación de Corea por la escasez de pruebas sobre la relación entre las políticas estatales, la liberalización del comercio y la calidad del medio ambiente. Toda evaluación del sector agropecuario requería un enfoque multidimensional, que tuviera en cuenta, entre otras cosas, las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, antes de poder sacar conclusiones. Corea pedía una

ampliación del marco para examinar esta cuestión, teniendo en cuenta en particular los mecanismos de transmisión relacionados con la agricultura sostenible y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y las deficiencias del mercado. Las conclusiones de Corea figuraban en el párrafo 21 de su documento no oficial.

73. La representante de Sierra Leona apoyó el llamamiento de Australia con respecto a la labor futura del Comité de Comercio y Medio Ambiente, especialmente en lo relativo a los países de bajos ingresos que dependían de productos básicos. Todas las propuestas insistían en la premisa de la relación entre las normas comerciales y la protección ambiental, a saber: la meta del desarrollo sostenible. Así debería ser con respecto a otros puntos. Todas las propuestas señalaban situaciones potenciales "sin perdedores" con relación a este punto. Sugirió a la Secretaría que sintetizara las sugerencias similares para facilitar la elaboración de un futuro programa de trabajo. El aspecto positivo del documento de Australia era que destacaba la necesidad de considerar la diversidad de políticas adecuadas y ambientalmente eficaces a través de los países. Sierra Leona detectaba una conexión entre los párrafos 11, 16 y 17 y apoya el párrafo 20.

74. La representante de Hong Kong acogió complacida la propuesta de Australia de que el Informe recomendase a los Ministros que la labor futura debía abarcar un análisis de la relación entre la liberalización del comercio y el medio ambiente con respecto a los textiles y las prendas de vestir, sector importante para los países en desarrollo. Hong Kong estaba de acuerdo en que el análisis debería abarcar un amplio conjunto de restricciones y distorsiones del comercio que produjeran efectos distorsionadores del comercio y que fueran nocivas para el medio ambiente. El Informe debería rechazar cualquier percepción de que existía un conflicto entre la liberalización del comercio y la protección ambiental y debería poner de manifiesto la necesidad de un programa de trabajo permanente para examinar las ventajas que aportaría al medio ambiente la supresión de las restricciones y distorsiones del comercio.

75. El representante de la Argentina dijo que existían numerosos aspectos comunes entre los documentos del Japón y de la Argentina: por ejemplo, ambos reconocían que la liberalización del comercio podía contribuir a la aplicación de una política ambiental correcta; que la liberalización del comercio, no obstante, no garantizaba de por sí la aplicación de esas políticas; que era necesario proseguir el análisis después de Singapur, y que el trabajo de otras organizaciones internacionales, como la UNCTAD y la OCDE, debía tenerse en cuenta. Al abordar el comercio de productos agropecuarios, se había hecho referencia a la cuantificación del valor de las externalidades provocadas por las distorsiones y restricciones. No obstante, para cuantificar el valor de una externalidad ambiental, había previamente que identificarla. De hecho, las propuestas de la Argentina, Australia, la India, los Estados Unidos y Noruega insistían en la necesidad de empezar por descubrir las situaciones en las que existía la posibilidad de reformas "sin perdedores". La primera fase consistía en determinar los sectores en los que la supresión de las distorsiones permitiría eliminar las externalidades negativas. Como se había señalado en muchas propuestas, el sector agropecuario debía mencionarse en el Informe. Estaba de acuerdo con el Japón en que la atención no se debería centrar exclusivamente en el sector agropecuario y debería incluir otros sectores que se hubiera determinado eran capaces de producir resultados "sin perdedores". El mercado no podía cuantificar las externalidades ambientales en el proceso de producción. La eliminación o corrección de las políticas públicas que agravaran las externalidades negativas permitiría determinar y cuantificar las deficiencias del mercado y posibilitaría la internalización del costo ambiental. Se refirió a la labor de la OCDE en esta esfera. Con respecto a la propuesta de la India, se declaró de acuerdo en que un mejor acceso al mercado para las exportaciones de los países en desarrollo podría generar los recursos necesarios para que estuvieran en condiciones de aplicar políticas ambientales y reservar recursos para financiar proyectos ambientales. Se refirió a la labor del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE a este respecto. Como sucede con la eliminación de las distorsiones del comercio de productos agropecuarios, el problema era el de los requisitos previos indispensables que permitirían la aplicación de políticas ambientales adecuadas. A este propósito, el acceso al mercado para las exportaciones de los países en desarrollo o la eliminación de distorsiones al comercio de ciertos productos no bastaban, pero constituían una condición necesaria para la puesta en práctica de políticas ambientales adecuadas.

76. El representante de Bangladesh dijo que se debería examinar la financiación de las políticas ambientales y la internalización de las externalidades ambientales, que no serían automáticas. Era

asimismo necesario examinar la repercusión de esas políticas, como el etiquetado ecológico, sobre las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo. Su capacidad para combatir la pobreza, ajustarse a la liberalización del comercio y aplicar medidas ambientales debería analizarse para que se pudiera lograr un equilibrio entre las prioridades ambientales y otras prioridades de desarrollo. El examen indicaba de manera incorrecta que el medio ambiente era el único problema que afrontaban los países en desarrollo.

77. El representante del Japón afirmó que existían muchos elementos comunes entre las propuestas del Japón y de Corea. Estaba de acuerdo con las CE en que el Comité de Agricultura era el responsable de supervisar el Acuerdo sobre la Agricultura. En general, la liberalización del comercio podía producir efectos ambientales positivos, pero existían diversos factores interrelacionados que deberían tomarse en consideración, entre ellos las condiciones naturales y socioeconómicas y las políticas ambientales de cada país. Los Estados Unidos habían tomado nota de los efectos ambientales positivos de la liberalización de la agricultura, pero también se deberían tomar en consideración otros factores. Era necesario efectuar un análisis empírico sobre la base de las condiciones naturales diferentes de cada país, que se podría efectuar en colaboración con la OCDE y la UNCTAD. Formularía otros comentarios más adelante sobre el documento de Australia.

78. El representante de los Estados Unidos dijo que, aun cuando el documento no oficial de la India se centraba en las perspectivas de los países en desarrollo, las cuestiones que planteaba con relación al acceso al mercado eran pertinentes para todos los países. Sobre la promoción de un acceso adicional al mercado, los Estados Unidos estaban de acuerdo en que esas mejoras podían desempeñar una importante función en la promoción de las ventajas ambientales creando riqueza que podía utilizarse para la consecución de metas ambientales o para promover la utilización eficiente de los recursos. Simultáneamente, esas ventajas ambientales no eran automáticas y las ventajas ambientales complementarias eran esenciales para garantizar que se obtuvieran esos beneficios. Aunque la OMC había obtenido grandes logros en el mejoramiento del acceso al mercado, debería tratar de generalizarse la liberalización del comercio. Con relación a la salvaguardia del acceso al mercado existente, los Estados Unidos entendían la preocupación de la India por las posibles repercusiones de las políticas ambientales y que habría que evitar el proteccionismo verde. Pidió a la India que explicase el significado de los efectos sobre el comercio no justificados de las políticas ambientales. No existía razón alguna para dar por supuesto que las disposiciones relativas al medio ambiente correspondían a una esfera a la que había que prestar una atención separada. Al referirse a las generalizaciones de la India sobre el efecto negativo del etiquetado ecológico, dijo que, si bien cuando estaba mal concebido y aplicado el etiquetado ecológico podía producir efectos negativos, muchos tipos de programas de etiquetado ecológico no planteaban esos problemas.

79. Se decidió suprimir el carácter reservado de la declaración de Australia contenida en el documento WT/CTE/W/36.

Séptimo punto: La cuestión de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen

80. El representante de Suiza dijo que, en el contexto de diversos convenios y convenciones internacionales, ya existía la obligación de notificar las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, como el procedimiento del consentimiento fundamentado previo (CFP) que figuraba en las Directrices de Londres. En el contexto de esos instrumentos era donde se deberían examinar inicialmente las formas de mejorar el intercambio de información sobre el comercio de productos cuya venta está prohibida en el país de origen. Estaba de acuerdo con Nigeria en que la contribución de la OMC en este sector debería limitarse a los productos cuya venta está prohibida en el país de origen que no eran objeto de las obligaciones de notificación existentes y que no deberían duplicar el trabajo en otros contextos. La actividad de la OMC debería ser de carácter secundario. Dijo que, sin una definición suficientemente precisa de los productos abarcados en el proyecto de Decisión de Nigeria sobre los productos cuya venta está prohibida en el país de origen (WT/CTE/W/32), no sería posible aumentar la transparencia sin caer en redundancias y repeticiones de la labor de otros foros. La definición de los productos prohibidos no debería suscitar ninguna dificultad, pero la de los productos fuertemente restringidos podía crear varios problemas. Como la competencia para determinar los productos fuertemente restringidos no podía

dejarse a cada país, Suiza propuso que esos productos se determinaran por remisión a acuerdos internacionales en los que se les diera un trato específico. El tratamiento de los desechos peligrosos daba origen a problemas concretos que se examinaban de manera pormenorizada en el Convenio de Basilea. Esta cuestión debería examinarse antes de decidir la inclusión de esos desechos en una definición de productos cuya venta está prohibida en el país de origen. La cuestión de la asistencia técnica que figuraba en el artículo 2 se estaba examinando en el Comité de Comercio y Desarrollo para tomar en consideración las directrices sobre las actividades de la OMC en esta esfera. El Comité de Comercio y Medio Ambiente no era el foro adecuado para debatir esta cuestión. Otras organizaciones contaban con conocimientos especializados y su contribución en este sector sería mejor que la de la OMC.

81. Las obligaciones de notificación de la OMC de los productos cuya venta está prohibida en el país de origen debían seguir siendo secundarias; sólo los productos que no tenían que ser notificados con arreglo a algún otro instrumento internacional deberían notificarse. La OMC debía circunscribir su función al intercambio de información sobre las actividades reguladoras, que se debían llevar a cabo utilizando la información contenida en los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con inclusión de las notificaciones efectuadas con relación a un título adecuado. Sólo los productos prohibidos en el mercado interno deberían estar sometidos a la notificación de la OMC. La extensión de las obligaciones de notificación a productos fuertemente restringidos podría provocar un cúmulo de notificaciones que pondrían en peligro el objetivo de la transparencia. El fortalecimiento de la cooperación entre la OMC y los órganos internacionales pertinentes contribuiría a limitar ese peligro. Convendría estimular a los países importadores a participar y a adherirse a un instrumento internacional, que las actividades de la OMC complementaría. Como lo había señalado Nigeria, la participación en instrumentos internacionales conexos varía. Para proporcionar información relativa a productos fuertemente restringidos a países que no fueran partes en instrumentos internacionales concretos, los Exámenes de las Políticas Comerciales podrían incluir un capítulo en el que se describiera las prohibiciones o las restricciones estrictas aplicables a los productos peligrosos. Durante el examen, las partes interesadas podrían solicitar cualquier otra información pertinente sobre los productos prohibidos o fuertemente restringidos. El artículo 3.1 de la propuesta de Nigeria sugería que siempre que un Miembro exportase un producto prohibido debería notificar cada expedición. Esto era exagerado y entrañaba gastos desproporcionados para los productores dado el objetivo de la transparencia. Como algunos de los instrumentos internacionales que figuraban en el anexo II del proyecto de Decisión no contenían ninguna obligación de notificación, sería útil hacer una distinción entre los que producían un efecto directo y los que producían un efecto secundario.

82. El representante del Japón pidió a Nigeria que aclarara qué productos estaban abarcados en el proyecto de Decisión y que diera ejemplos de problemas efectivos relacionados con las importaciones de productos cuya venta está prohibida en el país de origen. Preguntó si los automóviles usados eran considerados un producto prohibido. Aunque la importación de automóviles usados estaba frecuentemente prohibida, si no satisfacían normas ambientales o si no obtenían una certificación, la exportación a algunos países estaba autorizada. Una vez que se hubiera aclarado qué productos estaban abarcados, sería posible decidir si era necesaria una Decisión. Preguntó si los países exportadores de productos cuya venta está prohibida en el país de origen tenían que notificar las medidas relativas a esos productos con respecto al primer envío o a cada envío posterior.

83. El representante de Nigeria dijo que el proyecto de Decisión de su delegación contenía una definición de un producto cuya venta está prohibida en el país de origen. Los países clasificaban algunos productos como productos de venta prohibida en aplicación de su definición interna y los notificaban sobre esta base si no existía la obligación de notificar en un instrumento internacional conexo. El documento WT/CTE/W/14 abordaba la cuestión de la duplicación, que se había eludido en la propuesta de Nigeria. Dada la falta de conocimientos técnicos y capacidad en algunos países en desarrollo para determinar si un producto era un producto cuya venta estaba prohibida en el país de exportación, la asistencia técnica formaba parte integrante del proyecto de Decisión. Se habían tomado en consideración otros elementos, como la responsabilidad y la indemnización, pero basándose en consultas con los Miembros, Nigeria había decidido concentrarse en la notificación dado que la premisa del problema era la falta de información y conocimientos técnicos. El aumento de la transparencia gracias a la notificación daría a los países

importadores la posibilidad de adoptar decisiones fundamentadas acerca de la autorización o no de importaciones de productos cuya venta estaba prohibida en el país de origen. Existían opiniones discrepantes sobre los costos administrativos, el número de notificaciones y las dificultades estadísticas que entrañaba la propuesta de Nigeria. Señaló que las CE podían ocuparse de esta cuestión a un costo mínimo. Al modificar la redacción, había la posibilidad de tener en cuenta las observaciones relativas al artículo 3.1 con el fin de aclarar que las notificaciones deberían hacerse con respecto a los envíos realizados la primera vez y después únicamente si era necesario. En cuanto a las notificaciones, los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias eran inaplicables a los problemas relacionados con los productos cuya venta estaba prohibida en el país de origen ya que esos acuerdos trataban de especificaciones y normas relativas a las importaciones y no a las exportaciones. Consideraba que la solicitud de una lista ilustrativa no resultaría útil y que el dinamismo de la tecnología imposibilitaba su elaboración. El proyecto de Decisión especificaba que si un producto se definía como un producto cuya venta estaba prohibida en el país de origen y no se había notificado con arreglo a las disposiciones de ningún otro instrumento conexo, se notificaría a la OMC. Señaló que, incluso cuando no había surgido ninguna diferencia sobre la cuestión de las medidas comerciales recogidas en un AMUMA, existía la voluntad de buscar una solución orientada a la obtención de resultados para mejorar la certidumbre y la previsibilidad en esta esfera de interés. Comparó esta situación con la de un producto cuya venta está prohibida en el país de origen respecto del cual existían problemas concretos y recordó el principio de precaución a este respecto.

84. El representante del Canadá dijo que la preocupación por la duplicación se había reducido al entendimiento de que, si se había hecho una notificación con arreglo a los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias acerca de una prohibición o utilización interna de un producto, ésta sería similar a la notificación de un producto cuya venta está prohibida en el país de origen.

85. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación había respaldado los esfuerzos realizados en diversos foros internacionales pertinentes para abordar las cuestiones relacionadas con los productos cuya venta está prohibida en el país de origen. Los Estados Unidos tenían dudas en cuanto a la función que la OMC podría desempeñar en esta esfera. Los Estados Unidos no habían pedido una lista ilustrativa como parte de una Decisión relativa a los productos cuya venta está prohibida en el país de origen, sino una descripción de los problemas que no se estaban examinando en otros foros internacionales. Era difícil evaluar una solución sin tener un conocimiento adecuado de los detalles del problema. Para que funcionara el sistema de notificación del primer envío exigía que hubiera un control de los productos. Como este tipo de control tendría que establecerse en muchos países, sin una descripción del problema, esta tarea resultaría difícil. Los Estados Unidos respaldaban la propuesta de Hong Kong con relación al cuarto punto en el sentido de que la Secretaría compilara unas medidas ambientales relacionadas con el comercio que pudieran tener asimismo en cuenta algunas de las preocupaciones de Nigeria.

Octavo punto: Los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el medio ambiente

86. El representante de la India presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 23 de julio de 1996) relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y al Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica, que contenía varias obligaciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los ADPIC reconocía que los derechos de propiedad intelectual eran derechos privados e incorporaba obligaciones concretas sobre la cuestión de patentar formas de vida en la medida en que obligaba a los Miembros a conceder patentes sobre los productos para microorganismos y procesos no biológicos y microbiológicos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica reafirmaba que los países tenían derechos soberanos sobre sus recursos biológicos y reconocía la conveniencia de compartir de manera equitativa los beneficios derivados de su utilización. La India sugirió que el Comité de Comercio y Medio Ambiente examinara la relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC. En la sección IV de su documento no oficial, figuraban las sugerencias de la India relativas a la conciliación del Acuerdo sobre los ADPIC con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El documento no oficial

planteaba algunas cuestiones para someter a un nuevo debate y no excluía la posibilidad de que la India modificara esas cuestiones o planteara algunas otras en el futuro.

87. El representante de Corea presentó el documento no oficial de su delegación (de fecha 24 de julio de 1996) en el que se examinaban las posibilidades de transferir tecnologías ecológicamente racionales (TER) como un instrumento para alcanzar los objetivos de un AMUMA. El documento no oficial de Corea señalaba que una protección sólida de los derechos de propiedad intelectual promovía el desarrollo tecnológico. Esa protección era fundamental puesto que la tecnología, para que se pudiera transferir, tenía que existir. Sin embargo, en el contexto de los AMUMA, la cuestión de los derechos de propiedad intelectual requería que se le prestara atención. Si se controlara la utilización de la tecnología existente, los que tenían derechos sobre una tecnología alternativa podían ejercer un poder monopolista más fuerte. Si la tecnología alternativa con arreglo a un AMUMA fuera objeto de un monopolio o de un oligopolio, parecía existir la posibilidad de que las metas de un AMUMA y la protección de los derechos de propiedad intelectual resultaran mutuamente excluyentes. El documento de Corea ponía de manifiesto dos casos relacionados con el Protocolo de Montreal relativos al bromuro de metilo y a la producción de HFC. Aunque esas cuestiones indicaban posibles lagunas que afectaban a un AMUMA y al Acuerdo sobre los ADPIC, los casos citados en el documento no oficial no bastaban para extraer ninguna conclusión general. Corea consideraba que el Comité de Comercio y Medio Ambiente debería seguir mostrando cautela al llegar a una conclusión sobre esta cuestión y que el examen convenía que prosiguiera.

88. El representante de los Estados Unidos dijo que el hilo conductor común de las propuestas de la India parecía ser la ambivalencia acerca del Acuerdo sobre los ADPIC. Confiaba en que esto no constituyera un intento de volver a plantear en la mesa de negociación cuestiones resueltas durante la Ronda Uruguay. Los Estados Unidos sostenían que no existían contradicciones entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Preguntó cómo se ocupaba la India de la cuestión de los derechos de los autóctonos en el país. Pidió aclaraciones sobre la posición de la India con respecto al primer punto en comparación con el octavo punto. La postura de la India con respecto al primer punto parecía ser que no había necesidad de que la OMC diera cabida a los AMUMA y que las normas de la OMC eran todo lo flexibles que deberían ser con respecto a los AMUMA. Sin embargo, en cuanto al octavo punto, la India consideraba que era posible modificar la OMC para contribuir a la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Preguntó si la India accedería a examinar otros AMUMA para ver si era necesario introducir cambios en los Acuerdos de la OMC para darles cabida.

89. Los Estados Unidos no consideraban que el documento no oficial de la India (de fecha 20 de junio de 1996) demostrara que era necesario realizar un trabajo en este sector. En cambio, el documento no oficial llegaba a la conclusión de que no existía prueba alguna de conflicto entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los AMUMA o en la transferencia transfronteriza de tecnologías ecológicamente racionales y de productos basados en estas tecnologías (TER/P) patentados. El documento no oficial de la India se basaba en la hipótesis de que existían problemas o surgirían con respecto a la utilización y disponibilidad mundiales de TER/P patentados, que eran atribuibles a las normas de la propiedad intelectual del Acuerdo sobre los ADPIC. La experiencia estadounidense indicaba que no había problema alguno con respecto a la difusión de TER/P entre los países que habían establecido sistemas de propiedad intelectual compatible con los ADPIC. En cambio, solían aparecer problemas como resultado de los obstáculos a la inversión extranjera y al comercio de esos productos. Los problemas se deberían detectar en la fuente, en la medida en que correspondieran al mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente, en lugar de partir del supuesto de que su causa residía en el Acuerdo sobre los ADPIC. La protección de la propiedad intelectual era únicamente uno de los numerosos factores que influían en la transferencia de TER/P. Los reglamentos ambientales, el clima de la inversión extranjera y las condiciones del mercado producían un efecto más directo. El documento no oficial de la India reflejaba factores distintos de las normas de los ADPIC en su análisis de un problema hipotético de falta de acceso a TER/P patentados. La India sugería que nada de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC impedía que un Miembro revocase una patente. Varios artículos del Acuerdo sobre los ADPIC ponían en claro que un Miembro no podía revocar de manera sumaria patentes que protegieran TER/P y seguir siendo compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos no podían aceptar la interpretación de la India del artículo 16.2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica que sugería que ese artículo imponía una obligación general a todos los países

desarrollados de transferir todas las TER en condiciones "justas y muy favorables" a los países en desarrollo, independientemente de que estuvieran patentadas. El documento no oficial de la India ignoraba la segunda frase del artículo 16.2 que aclaraba que toda disposición de un país destinada a facilitar la transferencia de tecnología patentada debía respetar las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, refiriéndose a la necesidad de que esas transferencias se efectuaran en condiciones compatibles con una protección de los derechos de propiedad intelectual adecuada y eficaz. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica no se imponía ninguna obligación a los países desarrollados de proporcionar a los países en desarrollo tecnologías patentadas propiedad del sector privado en "condiciones preferenciales y no comerciales".

90. En el documento WT/CTE/W/22 se señalaba que ciertas tecnologías podían ser más fácilmente objeto de una apropiación indebida por medio de la copia sin la autorización del titular legítimo. Con respecto al párrafo 19 del documento no oficial de la India, los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la sugerencia de que la OMC debería promover la meta de la apropiación indebida de tecnología patentada de propiedad privada. El párrafo 20 contenía disposiciones de concesión obligatoria de licencias como instrumento para facilitar la transferencia de tecnología. El objetivo de las disposiciones de concesión obligatoria de licencia, como lo ponía de manifiesto el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, era proporcionar a los gobiernos medidas correctivas concretas y limitadas para combatir los usos indebidos de los derechos de patente. Los Estados Unidos no estaban de acuerdo en que fuera más adecuado que los Miembros que trataban de apropiarse indebidamente de tecnologías y secretos comerciales patentados se dirigieran primero al Estado en lugar de ponerse en contacto con el propietario de la tecnología patentada. La India sugería asimismo que el Acuerdo sobre los ADPIC debería modificarse para que los Miembros pudieran reducir el plazo de protección de los titulares de las patentes a menos de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud tal como lo prescribía el artículo 33, lo que caracterizaba como una situación "sin perdedores". Esa era una situación "con perdedores", ya que no tenía en cuenta ni los intereses del titular de la patente ni los del público. Los Estados Unidos no creían que el documento no oficial de la India demostrara la necesidad de modificar el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos presentarían observaciones por escrito sobre el documento no oficial de la India.

91. El representante de las Comunidades Europeas señaló el documento no oficial que habían distribuido en el Consejo sobre los ADPIC celebrado los días 22 a 26 de julio de 1996, en el que se declaraba que el Acuerdo sobre los ADPIC no debería debilitarse por nada que pudiera revelarse en el Comité de Comercio y Medio Ambiente.

92. El representante del Canadá dijo, sin perjuicio del establecimiento de nuevas formas de derechos de propiedad intelectual que favorezcan los conocimientos tradicionales de las poblaciones autóctonas, que el Canadá respaldaba las observaciones de los Estados Unidos sobre el documento no oficial de la India relativo al Acuerdo sobre los ADPIC. La postura del Canadá era que no existía ninguna incompatibilidad entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC, dando a "incompatibilidad" el sentido de una situación en la que, con respecto a las mismas partes y al mismo tema, dos tratados contenían disposiciones contradictorias que no podían cumplirse simultáneamente. El proyecto de Dunkel del Acuerdo sobre los ADPIC ya se conocía cuando el Canadá había considerado la conveniencia de firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, al que se había adherido después de asegurarse de que no existía ningún conflicto entre ellos. Dado que las intervenciones de la India y Corea suscitaban ciertas cuestiones acerca de la relación entre los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, afirmó que la transferencia de tecnología se había examinado ampliamente durante la Ronda Uruguay. En esa época, se reconoció que la mayoría de los regímenes internos mantenían leyes con respecto a las prácticas anticompetitivas y que existía una considerable polaridad entre los derechos exclusivos conferidos por las leyes relativas a la propiedad intelectual y las medidas correctivas de que se disponía para sancionar los usos indebidos de los derechos de propiedad intelectual. El Canadá consideraba que esta última cuestión era un fenómeno sistémico que no tenía ninguna conexión sectorial especial con la cuestión del acceso a las TER o con la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente. Por añadidura, la atención del Comité debería orientarse a los artículos 8.2, 31 k) y 40, que abordaban los usos indebidos de los derechos de propiedad intelectual como una práctica anticompetitiva. A este

respecto, era igualmente pertinente señalar que las posibles disciplinas internacionales con relación a las normas legales sobre la competencia figuraban entre las "nuevas" cuestiones comerciales que atraían la atención dentro de la OMC y en otros foros.

93. La representante de Singapur, en nombre de la ASEAN, dijo que formularía otros comentarios sobre las propuestas relativas a este punto. Recordó la declaración que había hecho sobre este punto en la reunión del Comité de Comercio y Medio Ambiente celebrada en junio de 1995 y dijo que la ASEAN desearía participar en cualquier consulta oficiosa sobre esta cuestión.

94. El representante del Japón apoyó la orientación general del documento no oficial de Corea. Dada la prioridad de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, era prematuro examinar su modificación. Cualquier problema relacionado con derechos de propiedad intelectual que afrontaran los países en desarrollo debería resolverse por medio de la asistencia técnica.

95. El representante de Suiza dijo que la protección de los derechos de propiedad intelectual contribuía a la creación de nuevas tecnologías que eran más inocuas para el medio ambiente que las viejas tecnologías y favorecía la transferencia de TFR. Apoyó los párrafos 19 a 22 del documento WT/CTE/W/22 en los que se describían los motivos por los que la protección de la propiedad intelectual tenía una repercusión favorable en las empresas que realizaban transferencias tecnológicas. Estaba de acuerdo con los Estados Unidos en que la protección de la propiedad intelectual era únicamente uno de los factores que influían en la transferencia de tecnología. Mucha mayor importancia tenían factores como la estabilidad política del país receptor, la infraestructura, el acceso a recursos financieros y el nivel de capacitación profesional. Suiza tendría que estudiar la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica a fondo antes de formular otros comentarios. Como habían señalado los Estados Unidos, era difícil conciliar la posición de la India sobre el primer punto con su propuesta relativa al octavo punto de modificar el Acuerdo sobre los ADPIC.

96. El representante de la India pidió que los comentarios sobre el documento no oficial de su delegación se presentaran por escrito. Reiteró que la postura de su país con relación al primer punto era que las disposiciones del GATT 1994 eran adecuadas para tratar de los AMUMA; la India no se había referido a las disposiciones de la OMC. El documento de la ASEAN sobre el primer punto daba una perspectiva más amplia con respecto a las disposiciones de la OMC.

97. El representante del Brasil mencionó la declaración del Excmo. Sr. Embajador Lampreia, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, sobre el estado del debate en el Comité de Comercio y Medio Ambiente que se había presentado en la Reunión Ministerial Oficiosa de Lausana celebrada los días 1 y 2 de julio de 1996. El Brasil había distribuido esa declaración (de fecha 22 de julio de 1996) para información de los Miembros.

Décimo punto: Documentación aportada a los órganos pertinentes con respecto a las disposiciones adecuadas para establecer relaciones con las organizaciones no gubernamentales a que se hace referencia en el artículo V de la OMC

98. El Presidente señaló tres decisiones adoptadas por el Consejo General en su reunión del 18 de julio de 1996 relativas a: i) procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC contenida en el documento WT/L/160/Rev.1; ii) directrices sobre la calidad de observador de las organizaciones intergubernamentales internacionales contenida como anexo del reglamento de la OMC que figura en el documento WT/L/161; y iii) directrices para la adopción de disposiciones sobre las relaciones con organizaciones no gubernamentales en aplicación del artículo V:2 del Acuerdo de la OMC contenida en el documento WT/L/162. Señaló que las dos últimas decisiones guardaban relación con el debate del décimo punto que tenía lugar en el Comité de Comercio y Medio Ambiente. Si el Comité así lo decidiera, dijo que en el Informe se haría referencia a esas decisiones.

99. Los representantes de la India, México y Nigeria dijeron que esas decisiones se deberían someter al Comité de Comercio y Medio Ambiente para que este adoptara una decisión sobre la mejor manera de reflejarlas en el Informe.

100. El representante de Australia afirmó que el debate en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de estas decisiones únicamente serviría para duplicar la labor del Consejo General. Australia no podía estar de acuerdo con nada diferente que se adoptara en cualquier otro Comité de lo que ya había adoptado su Gobierno en el Consejo General.

101. El representante de los Estados Unidos recordó que los miembros del Comité de Comercio y Medio Ambiente habían acordado suspender el debate sobre el décimo punto en espera de los resultados del debate en el Consejo General. Si las delegaciones deseaban volver a examinar el décimo punto para ver si se podía hacer algo más de lo que se había hecho, los Estados Unidos estaban dispuestos a presentar sus ideas, particularmente con respecto a las disposiciones relativas a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales.

102. Tras una propuesta hecha por el Presidente, se decidió examinar este asunto en la reunión de septiembre.

Informe sobre los resultados de las consultas oficiosas

103. El Presidente informó sobre sus consultas oficiosas tal como se había convenido en el balance de situación de mayo. Dijo que se habían convocado varias consultas con delegaciones sobre diversos puntos para procurar avanzar en los trabajos. Sobre los puntos primero y quinto, había celebrado una consulta informal con las delegaciones que habían presentado propuestas por escrito, y con el Canadá, debido al esfuerzo que esta delegación había hecho para resumir los elementos comunes de las diversas propuestas en un único cuadro. Se estudió la posibilidad de refundir las propuestas, con miras a simplificar el análisis de sus similitudes y diferencias. Se decidió, no obstante, concentrarse en la preparación de una lista de las cuestiones de que se había tratado en las propuestas. Esta lista facilitaría las deliberaciones e impulsaría la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente como primera etapa y teniendo en cuenta que otras delegaciones habían adoptado posiciones que no se reflejaban o que no se reflejaban plenamente en las propuestas por escrito. La lista se había preparado y distribuido en una consulta oficiosa celebrada el 22 de julio de 1996. Se podían obtener ejemplares de esa lista en la Secretaría. Habida cuenta de las propuestas que se habían presentado recientemente, tenía la intención de proseguir las consultas oficiosas sobre este punto.

104. Con relación al punto 3 b), había alentado al Canadá y a los Estados Unidos, que habían presentado propuestas por escrito relativas a los programas de etiquetado ecológico, a examinar la posibilidad de unificar sus propuestas. Eso no había resultado posible. El Canadá había presentado luego un proyecto de Decisión sobre los programas de etiquetado ecológico y las CE habían sometido una propuesta. Estas comunicaciones recientes tendrían que ser examinadas en nuevas consultas sobre esta cuestión. Con relación al cuarto punto, el Presidente había estado en contacto con el Centro de Comercio Internacional y la UNCTAD para reunir información sobre sus actuales bases de datos relativas a las medidas ambientales relacionadas con el comercio. Había consultado también a Hong Kong, que había presentado una propuesta sobre este punto. Con respecto al sexto punto, había decidido organizar consultas no oficiales una vez que se hubieran recibido todas las propuestas por escrito destinadas a esta reunión. Para entender mejor las cuestiones relacionadas con el séptimo punto, había convocado una consulta oficiosa con Nigeria, Egipto y los Estados Unidos, para examinar esta cuestión a fondo. Este debate había promovido un entendimiento de las posiciones de cada una de esas delegaciones. Se proponía proseguir el diálogo en esta esfera con miras a hacer avanzar los trabajos. Sobre los puntos octavo y noveno, se había reunido con diversas delegaciones para hacer un balance de sus opiniones.

105. El 22 de julio el Presidente había convocado una reunión informal de 22 delegaciones en la que se habían formulado sugerencias relativas a cómo debería procederse en la preparación del Informe. Esas

sugerencias iban desde propuestas destinadas a concentrar las deliberaciones en unas pocas cuestiones en grupos pequeños hasta propuestas de debatir todas las cuestiones en reuniones abiertas a todas las delegaciones que desearan participar en ellas. Estas diversas sugerencias reflejaban el carácter complejo de los temas, las diferentes posturas con respecto a determinados elementos del orden del día del Comité de Comercio y Medio Ambiente y las opiniones discrepantes sobre si se debería avanzar simultáneamente con respecto a todos los puntos o con respecto a cuestiones concretas en las que se podrían lograr resultados en la Conferencia Ministerial de Singapur. Como resultado de todo ello, había sido difícil establecer un consenso sobre la manera de proceder. Reiteró que, tal como se había convenido en el balance de situación efectuado en mayo, la Secretaría distribuiría un proyecto de la introducción y de las secciones I y II del Informe el 31 de julio de 1996, en la inteligencia de que el informe final en conjunto, incluida la sección III, se examinaría una vez que hubiera quedado completado el trabajo de fondo. Dadas las opiniones discrepantes sobre la manera de proceder, el Presidente tenía la intención de analizar la situación con respecto a cada punto del programa de trabajo y de consultar con las delegaciones individualmente antes de convocar otra consulta oficiosa en la que podrían participar las delegaciones interesadas.

106. Los representantes de las Comunidades Europeas y del Japón respaldaron al Presidente y opinaron que convenía promover un entendimiento común de las cuestiones basado en las deliberaciones habidas hasta la fecha con el fin de lograr resultados concretos en la Conferencia Ministerial.

107. El representante del Brasil indicó que su delegación estaba dispuesta a contribuir al proceso de consulta que permitiría llegar a un consenso para adoptar el Informe en la reunión de octubre. El Brasil sugirió que se intensificaran las consultas oficiosas dado que la reunión de octubre se acercaba. El representante de las Comunidades Europeas dijo que la atención inicial de esas consultas debería concentrarse en algunas de las cuestiones que ya habían sido objeto de extensas deliberaciones, aunque sin excluir otros asuntos. Los representantes de Egipto y Nigeria se declararon de acuerdo en que habría que intensificar las consultas oficiosas, pero que deberían ser equilibradas para tratar de todos los puntos del programa de trabajo y que no se debería acordar nada hasta que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la totalidad. El representante de la India dijo que el Comité de Comercio y Medio Ambiente tenía por mandato adoptar un Informe integrado para sometérselo a la consideración de los Ministros.

108. El representante de Nigeria dijo que hasta la fecha el debate había aclarado algunas cuestiones, pero que otras seguían siendo confusas o polémicas. Afirmó que las soluciones o decisiones sometidas a la aprobación no deberían presentarse como un *fait accompli*, sino basarse en un proceso representativo de creación de consenso. Nigeria consideraba que el Comité de Comercio y Medio Ambiente podía lograr resultados en la Conferencia Ministerial y apoyaría los esfuerzos encaminados a este fin que fueran equilibrados y reflejaran un consenso. Era necesario obtener resultados porque se estaban ejerciendo presiones políticas externas y porque el debate indicaba que estaban justificadas para dilucidar las normas actuales de la OMC o proponer nuevas normas, de ser necesario.

109. La representante de Singapur, en nombre de la ASEAN, dijo que la prisa por obtener resultados no debería inducir al Comité de Comercio y Medio Ambiente a infringir los derechos y obligaciones de los Miembros dimanantes de los Acuerdos de la OMC. El Comité podría proseguir su labor después de la Conferencia Ministerial.

110. El representante de México pidió que se le aclarara cuándo y qué delegaciones participarían en nuevas consultas oficiosas. El hecho de que una delegación no hubiera presentado una propuesta por escrito sobre algún punto determinado no significaba que no tuviera una posición nacional sobre este punto y que no se debería incluir en el proceso de las consultas oficiosas.

111. Los representantes de Cuba, Egipto, el Pakistán y el Perú respaldaron consultas oficiosas transparentes y abiertas. El representante de Australia dijo que la experiencia indicaba que la mayor parte de las decisiones en el contexto del GATT/OMC se habían facilitado, por lo menos inicialmente, en grupos más pequeños.

112. El Presidente recordó que al término de esta reunión se celebraría una reunión informal en la que los Miembros tendrían la posibilidad de continuar el análisis de todos los puntos del programa de trabajo para seguir avanzando en la preparación del Informe. En respuesta a las observaciones hechas por algunas delegaciones, dijo que el proceso de las consultas oficiosas seguiría siendo transparente y tendría en cuenta las opiniones de todas las delegaciones interesadas, incluidas las que consideraban que sus opiniones no se habían reflejado plenamente en las propuestas escritas. Dijo que consultaría inicialmente con las delegaciones a título individual en el próximo futuro. Luego ampliaría el proceso de las consultas oficiosas para promover un consenso y conseguir que se logaran los máximos progresos posibles antes de la reunión de septiembre.